



**Convención Internacional sobre  
la Eliminación de Todas las Formas  
de Discriminación Racial**

Distr. general  
19 de mayo de 2016

Original: español  
Español, francés e inglés  
únicamente

---

**Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial**

**Examen de los informes presentados por los  
Estados partes en virtud del artículo 9 de la  
Convención**

**Informes periódicos 23º y 24º combinados que los Estados  
partes debían presentar en 2016**

**Ecuador\***

[Fecha de recepción: 13 de abril de 2016]

---

\* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

GE.16-08063 (S)



\* 1 6 0 8 0 6 3 \*

Se ruega reciclar



## Índice

	<i>Página</i>
Siglas .....	3
I. Introducción .....	5
II. Información relativa a la aplicación de las recomendaciones del Comité de Expertos y la Convención .....	5
Tema 1: Políticas para la eliminación de la discriminación racial - Aplicación del párrafo 11 .....	5
Tema 2: Medidas Especiales - Aplicación del párrafo 12 .....	11
Tema 3: La Población Ecuatoriana de Origen Romaní - Aplicación del párrafo 13 .....	13
Tema 4: Los Refugiados - Aplicación del párrafo 14 .....	14
Tema 5: Los Trabajadores Migrantes y sus Familias - Aplicación del párrafo 15 .....	16
Tema 6: Lucha contra la Discriminación en los Medios de Comunicación - Aplicación del párrafo 16.....	17
Tema 7: Participación, Consulta y Consentimiento - Aplicación del párrafo 17 .....	18
Tema 8: La Falta de Procesos Judiciales por Discriminación Racial - Aplicación del párrafo 18 ...	22
Tema 9: Coordinación de la Justicia Indígena y la Ordinaria - Aplicación del párrafo 19 .....	24
Tema 10: Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios – Aplicación del párrafo 20 .....	25
Tema 11: Acceso Masivo a la Salud Pública que responda a la Realidad Étnica - Aplicación del párrafo 21.....	30
Tema 12: Acceso a la Educación Intercultural que responda a la Realidad Étnica - Aplicación del párrafo 22.....	32
Tema 13: Las Múltiples Formas de Discriminación - Aplicación del párrafo 23 .....	33
Tema 14: Los Pueblos en Situación de Aislamiento - Aplicación del párrafo 24 .....	38
Tema 15: Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban - Aplicación al párrafo 25.....	40
Tema 16: Difusión de los Informes - Aplicación del párrafo 26.....	41
III. Conclusiones .....	41

## Siglas

ACNUR:	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ANMIG:	Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género
ANINP:	Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos
ANIMHU:	Agenda Nacional para la Igualdad en Movilidad Humana
APPID:	Agenda Nacional de Políticas Públicas para la Igualdad en la Diversidad
ASOROM:	Asociación Nacional del Pueblo Rom del Ecuador
CES:	Consejo de Educación Superior
CIE:	Centro de Internamiento de Extranjeros
CNE:	Consejo Nacional Electoral
CNI:	Consejos Nacionales para la Igualdad
CNIG:	Consejo Nacional para la Igualdad de Género
CNII:	Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
CODENPE:	Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral
COIP:	Código Orgánico Integral Penal
COPFP:	Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
CORDICOM:	Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación
COFJ:	Código Orgánico de la Función Judicial
COOTAD:	Código Orgánico de Organización Territorial
CPCCS:	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
CRE:	Constitución de la República del Ecuador
DP:	Defensoría Pública
DPE:	Defensoría del Pueblo del Ecuador
ENES:	Examen Nacional para la Educación Superior
ESMIL:	Escuela Superior Militar Eloy Alfaro
EMZITT:	Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri - Taromenane
FGE:	Fiscalía General del Estado
GAR:	Grupo de Alto Rendimiento (según resultados del Examen Nacional del Educación Superior)
IES:	Instituto de Educación Superior
INEC:	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INEPS:	Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
LOC:	Ley Orgánica de Comunicación

LOEI:	Ley Orgánica de Educación Intercultural
LOFL:	Ley Orgánica de la Función Legislativa
LOPC:	Ley Orgánica de Participación Ciudadana
LORHUA:	Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua
LOEOP:	Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas
LOSEP:	Ley Orgánica de Servicio Público
LOTAIP:	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
MAE:	Ministerio del Ambiente
MAIS:	Modelo de Atención Integral de Salud
MINEDUC:	Ministerio de Educación
MINFIN:	Ministerio de Finanzas
MDI:	Ministerio del Interior
MDT:	Ministerio del Trabajo
MIES:	Ministerio de Inclusión Económica y Social
MREMH,	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
MSP:	Ministerio de Salud Pública
NNA:	Niños Niñas y Adolescentes
PCIC:	Programa de Capacitación Integral Continua
PGE:	Presupuesto General del Estado
PIAV:	Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario
PNBV:	Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017
PNE:	Policía Nacional Ecuatoriana
PNEVG:	Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres
SENESCYT:	Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
SENPLADES:	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SIEH:	Sistema Integrado de Encuestas a Hogares
SNGP:	Secretaría Nacional de Gestión de la Política
SNIES:	Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social
SNNA:	Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
UATH:	Unidad de Administración del Talento Humano
UEVG:	Unidades Especializadas en Violencia de Género
UNASUR:	Unión de Naciones Suramericanas

## I. Introducción

1. El Estado ecuatoriano es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial ICERD (en adelante la Convención), desde el 22 de septiembre de 1966.
2. Según lo establecido por la Convención en su Art. 9, los Estados partes deberán presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en virtud de este tratado. En este sentido, el Estado ecuatoriano expuso ante el Comité sus informes periódicos combinados 20° a 22°, el 31 de agosto de 2012.
3. Con estos antecedentes, el presente documento contiene los informes periódicos combinados 23° y 24° del Estado ecuatoriano, con arreglo al párrafo 29 del documento de observaciones finales (CERD/C/ECU/CO/20-22) del Comité, y se encuentra elaborado de conformidad con las directrices CERD/C/2007/1 y las directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/MC/2006/3 y Corr.1).
4. El informe presenta los principales avances en la aplicación de la Convención, haciendo énfasis en las medidas legislativas, judiciales, administrativas y pragmáticas que han sido implementadas por el Estado ecuatoriano en el período 2012-2015.
5. Para la preparación y validación del presente informe se contó con un equipo interinstitucional conformado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), que coordinó con las entidades rectoras de la política pública —Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)— y demás instituciones competentes en la materia.

## II. Información relativa a la aplicación de las recomendaciones del Comité de Expertos y la Convención

### Tema 1: Políticas para la eliminación de la discriminación racial - Aplicación del párrafo 11

6. La Constitución de la República del Ecuador (CRE) del año 2008, incorpora conceptos y enfoques innovadores en materia de derechos humanos, consagrando como mandato el principio de igualdad y no discriminación<sup>1</sup>, de modo que todas las personas,

<sup>1</sup> Constitución de la República del Ecuador, Art. 3.- “Son deberes primordiales del Estado:

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. (...)”.

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (...)”

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. (...)”.

tanto individuos como colectivos (comunidades, pueblos y nacionalidades) sean considerados iguales ante la ley y gocen de los mismos derechos, tal como fue argumentado en el informe CERD/C/ECU/20-22.

7. De la misma manera, la CRE enfatiza reiteradamente la calidad diversa de la composición demográfica y cultural del Ecuador, reconociendo la existencia de pueblos y nacionalidades con características culturales y antropológicas propias, que el Estado debe proteger, y a la vez cohesionar desde acciones que apunten a la inclusión social y a la interculturalidad<sup>2</sup>.

8. Con estos dos principios, citados frecuentemente en la CRE, y el enfoque de derechos en el cual se insertan, la inclusión social y la lucha contra la discriminación se convierten en líneas de acciones prioritarias y transversales. Esto significa que se elevan a principios orientadores de toda la gestión pública y por ende de todas las políticas que se formulen a nivel sectorial e intersectorial en todos los niveles de gobierno. Los principios constitucionales marcan la pauta para los distintos instrumentos de la planificación y gestión nacional a continuación expuestos.

9. En este sentido, el Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017 (PNBV)<sup>3</sup>, plantea diversos objetivos y metas, vinculados a la protección, garantía y respeto de los derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El PNBV corresponde a un importante instrumento de política pública para promover la equidad, en estricto apego al mandato constitucional; se eleva desde la multicausalidad de las desigualdades sociales y de la pobreza, organizándose en 12 objetivos nacionales, y contiene una amplia gama de políticas y lineamientos estratégicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el país. A su vez, incorpora una serie de obligaciones y responsabilidades estatales para combatir sus causas estructurales, a partir de mecanismos, tanto normativos, como de transformación institucional e integración y articulación de servicios y bienes públicos.

10. El PNBV determina como sus objetivos los siguientes: garantizar una educación intercultural con pertinencia cultural para comunidades, pueblos y nacionalidades; la protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario; la promoción de los conocimientos y saberes ancestrales, las innovaciones y prácticas tradicionales sustentables; la eliminación de la discriminación racial; la generación de la normativa referente a los procesos de consulta previa y participación ciudadana de las comunidades, pueblos y nacionalidades; la prestación de servicios públicos diferenciados, adaptados a la cosmovisión y los enfoques de estos; la incorporación de pueblos y nacionalidades a la administración pública; y, el apoyo a la conformación de circunscripciones territoriales indígenas<sup>4</sup>.

11. Además, la construcción del PNBV tuvo un proceso altamente participativo: primero, se nutrió de un programa de gobierno colectivamente construido, dentro del cual cerca de cinco mil personas aportaron ideas que fueron plasmadas en el documento; en un segundo momento, casi ocho mil doscientas personas participaron en más de cien eventos públicos y espacios virtuales, conforme al siguiente detalle<sup>5</sup>:

- Diálogos del Buen Vivir (5160 -cinco mil ciento sesenta- participantes).  
Identificación de nudos críticos y formulación de propuestas. Posteriormente, en

<sup>2</sup> Preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador| y Art. 1.

<sup>3</sup> Disponible en: [www.buenvivir.gob.ec](http://www.buenvivir.gob.ec).

<sup>4</sup> Abordaje directo de la lucha contra la discriminación racial y social en el PNBV: Objetivos 2 y 6; Abordaje indirecto: Objetivos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12.

<sup>5</sup> Toda la información y los datos cuantitativos de esta sección fueron obtenidos de los informes de sistematización de las mesas diálogos para el Buen Vivir desarrolladas en el 2012 por SENPLADES.

talleres zonales, se analizó la alineación de las propuestas de los procesos de diálogo con los objetivos, las políticas, las metas y los indicadores del Plan.

- Talleres, mesas temáticas y grupos focales (1061 -mil sesenta y un- participantes). En ellos se discutió, entre otros, temas de igualdad, capacidades y potencialidades.
- Veedurías y observatorios (605 -seiscientos cinco- participantes). Estos impulsaron recomendaciones sobre la base de la experiencia del anterior Plan para la implementación de la política pública.
- Talleres participativos de prospectiva a nivel zonal (240 -doscientos cuarenta- participantes). En estos espacios se identificó problemas claves para la visión nacional y zonal a largo plazo.
- Reuniones con delegados de organizaciones sociales nacionales, consejos sectoriales y asambleas locales (266 -doscientos setenta y seis- participantes). En ellas se identificaron nudos críticos y propuestas para las políticas nacionales, y se preparó la primera *Asamblea Plurinacional de Planificación Participativa*, que aprobó el PNBV.
- Seminario internacional (780 -setecientos ochenta- participantes). Se llevó a cabo un total de seis paneles de conferencias con expertos internacionales, en los que participaron, con sus inquietudes sobre el Plan, miembros de la academia y la ciudadanía en general.
- Maratones radiales y espacios virtuales (100 -cien- participantes). Se realizaron programas radiales abiertos y se receptaron aportes a través de la web, donde se recogieron inquietudes de la ciudadanía para la construcción del Plan.

12. Como principal avance en el establecimiento de la institucionalidad para la garantía y plena vigencia de los derechos consagrados por la CRE y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en el año 2012 se elaboró el proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales de la Igualdad (CNI)<sup>6</sup> por parte de la Asamblea Nacional. Después de aproximadamente dos años de reflexión, consultas y debates, esta ley fue aprobada a través de la Ley Orgánica de los CNI y su Reglamento<sup>7</sup>. La Ley creó cinco Consejos especializados: 1) de género, 2) intergeneracional, 3) de pueblos y nacionalidades, 4) de discapacidades y 5) de movilidad humana, para promover, impulsar y proteger el respeto al principio de igualdad y no discriminación, como piedra angular en el diseño de la normativa y trabajo de la institucionalidad pública, en todos los niveles del gobierno (incluyendo a los gobiernos locales), a fin de fortalecer la unidad nacional en la diversidad y la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural.

13. Los CNI son organismos de derecho público, con personería jurídica, que forman parte de la Función Ejecutiva; tienen competencias a nivel nacional y gozan de autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera; no requieren de estructuras desconcentradas ni entidades adscritas para el ejercicio de sus atribuciones y funciones. Además, tienen el mandato de participar en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, fomentando una cultura de paz que desarrolle capacidades humanas, medidas de acción afirmativa y la erradicación de actos, usos, prácticas, costumbres y estereotipos considerados discriminatorios. Los CNI se rigen por principios de: igualdad, alternabilidad, participación democrática, inclusión, interculturalidad y pluralismo.

<sup>6</sup> Registro Oficial N° 283, de 7 de julio de 2014.

<sup>7</sup> Decreto Ejecutivo 686, Registro Oficial N° 521, de 12 de junio de 2015.

14. La visión de los CNI es construir una sociedad en la cual los grupos de atención prioritaria, conozcan y ejerzan sus derechos, relacionándose entre sí y con los demás grupos de forma solidaria, equitativa, corresponsable y en armonía con la naturaleza. Su misión institucional es incidir en la sociedad y el Estado, a través de políticas públicas cuyo enfoque sea el de igualdad y de derechos.

15. Para tal efecto, las Agendas Nacionales para la Igualdad permiten abordar directamente problemáticas sociales, entre ellas las referentes a la desigualdad y discriminación, y que son de obligatorio cumplimiento para todas las funciones del Estado en todos los niveles de gobierno. Como instrumentos técnico-políticos, recogen una serie de propuestas de políticas públicas, analizadas y elaboradas por los Consejos de Igualdad y la Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), con la participación de ciudadanas y ciudadanos, comunidades, nacionalidades y pueblos. El proceso de construcción se llevó a cabo con el propósito de facilitar a la institucionalidad pública un instrumento para enfrentar la multicausalidad de la discriminación en todas sus aristas; es así como se configuró la necesaria interseccionalidad en la atención de los grupos de atención prioritaria sujetos a múltiples factores de vulneración de derechos.

16. De manera específica, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades funcionará como órgano responsable de velar por la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, y las relaciones interculturales de la sociedad ecuatoriana<sup>8</sup> el cual se encuentra en proceso de transición, sin que esto afecte al desarrollo de sus competencias, que son ejecutadas a través de la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad de la SNGP.

17. Acorde con el Art. 156 y transitoria sexta de la CRE, los Consejos Transitorios de Desarrollo -Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), y Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral (CODEPMOC)-, junto con organizaciones sociales diversas, en forma participativa y con el apoyo técnico de SENPLADES, elaboraron una primera versión de la Agenda Plurinacional de Políticas Públicas para la Igualdad en la Diversidad (APPID) 2013-2017, que, con ciertas modificaciones y ajustes finales, hoy se conoce como la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos (ANINP), cuyo proceso de construcción contó con el soporte del Programa Proindígena de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ.

18. La ANINP funciona como herramienta central de planificación y orientación de las acciones del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, además de un conjunto de instituciones públicas como entidades responsables de la Función Ejecutiva (ministerios ejecutores y coordinadores), la Asamblea Nacional, el Poder Judicial y el CPCCS. En este sentido, la ANINP gestiona la implementación de políticas públicas sustanciales para promover la igualdad y no discriminación e inclusión de las nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, en el marco de la vigencia plena de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales, territoriales, culturales, individuales y colectivos. En este sentido, el enfoque intercultural acompaña transversalmente la construcción de los distintos ejes de desarrollo.

19. Con respecto al Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica Cultural, la función ejecutiva del Estado, mediante Decreto Ejecutivo N° 060, publicado en el Registro Oficial N° 45, del 13 de octubre de 2009, otorgó al Plan la calidad de Política Pública de Estado. En consecuencia, el CPCCS, con fecha 18 de marzo de 2013, dando cumplimiento a sus atribuciones constitucionales, convocó a organizaciones

---

<sup>8</sup> Reglamento a la Ley Orgánica de los CNI, Art. 1.

sociales pertenecientes a pueblos y nacionalidades, con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento efectivo de los Derechos Colectivos. Para tales fines, se conformó un Observatorio Ciudadano que tiene la potestad de obtener información, monitorear, evaluar y emitir reportes e informes.

20. Actualmente, dicho Observatorio cuenta con mecanismos estructurados, y opera con base en su propio paquete metodológico para su buen funcionamiento. Se ha planteado la construcción de acuerdos con instituciones académicas, que permitan fortalecer los procesos investigativos. El Observatorio cuenta con el aval institucional del CPCCS, a través de la Coordinación General de Interculturalidad, en coordinación con la Subordinación de Control Social, para la gestión y manejo de los siguientes programas y políticas:

- Inserción laboral de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades a las instituciones públicas y de lo público, de conformidad con el porcentaje de habitantes existentes, establecido en el censo 2010.
- Políticas públicas para erradicar la discriminación de todo tipo existente en las instituciones públicas y de lo público.
- Medidas claras de acción afirmativa, dirigidas a personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades en el desarrollo de concursos de méritos y oposición para el ingreso o ascenso en el servicio público.

21. Asimismo, el CPCCS difundió los alcances del Decreto Ejecutivo N° 060 en los talleres de Fortalecimiento organizativo y relacionamiento con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en que participaron pueblos y nacionalidades indígenas, así como con el Pueblo Afroecuatoriano, en los eventos del Decenio Afroecuatoriano.

22. Adicionalmente, el Estado ecuatoriano cuenta con el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (SNIES), que constituye un conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos establecidos en la CRE<sup>9</sup>, en concordancia con el PNBV. El SNIES es guiado por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación, y funciona bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

23. La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (LOEOP)<sup>10</sup>, también denominada Código de la Democracia, reconoce la adopción de medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados de la sociedad<sup>11</sup> y establece, en igualdad de condiciones, la participación política, a través del voto, de personas extranjeras que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y estén inscritos en el Registro Electoral.

24. Otro de los avances significativos constituye la implementación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), sustentado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC)<sup>12</sup>, el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

<sup>9</sup> Constitución de la República del Ecuador, Art. 340.

<sup>10</sup> Suplemento Oficial N° 578, de 27 de abril de 2009.

<sup>11</sup> Constitución de la República del Ecuador, Art. 3.- “El Estado promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas para las elecciones pluripersonales será obligatoria su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados”.

<sup>12</sup> Suplemento Oficial N° 175, de 20 de abril de 2009.

(COPFP) que permite transversalizar la participación ciudadana, en todos los ejercicios de planificación nacional.

25. La ley dispone que estos procesos participativos -especialmente los procesos de formulación de políticas públicas- pongan énfasis en la inclusión de sectores históricamente excluidos, tales como miembros de minorías étnicas o personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, así como a aquellas personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria -niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, mujeres embarazadas y personas en situación de movilidad humana<sup>13</sup>.

26. El 29 de abril de 2015, mediante Decreto Ejecutivo N° 656<sup>14</sup>, se expidió el Reglamento para el Funcionamiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales, que constituyen instancias de diálogo, deliberación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de carácter sectorial; y, se estableció el mecanismo para la discusión de los lineamientos y seguimiento de la evolución de las políticas ministeriales, con el objetivo de garantizar el derecho a la participación ciudadana en los asuntos de interés público, y la soberanía, que radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la CRE.

27. La aplicación del Decreto Ejecutivo N° 656 es obligatoria para los Ministerios Sectoriales y para las organizaciones sociales y actores de la sociedad civil organizada que integren y/o participen en los Consejos Ciudadanos Sectoriales, sin discriminación alguna. En él se establecen los parámetros para su conformación: requisitos, procedimientos, funciones y atribuciones.

28. En lo que respecta a la formulación de políticas públicas de salud, durante el último año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha aprobado varios instrumentos que cumplen con los principios establecidos en la CRE (equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética) con enfoque de género y enfoque generacional.

29. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) formula y ejecuta distintas políticas, programas y servicios que garantizan la cohesión y participación social. Los servicios orientados al desarrollo infantil integral, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, a la protección especial y de jóvenes, considerando la experiencia intercultural, buscan fortalecer el reconocimiento y pleno desarrollo de los diversos grupos étnicos. Estas acciones estatales están especialmente dirigidas a la población en situación de pobreza, de la que forman parte tanto grupos afrodescendientes, como indígenas y montubios, que históricamente han sido víctimas de la exclusión.

30. Para garantizar la interculturalidad, en el MIES, las instancias encargadas de cada grupo prioritario realizan procesos de reflexión sobre cambios en las modalidades de atención, contando con la participación ciudadana de las distintas etnias, y amparándose en investigaciones que permitan fortalecer el enfoque intercultural en cada una de sus acciones. Además, en cuanto a prestación de servicios, cuentan con medidas de acción afirmativa de selección de personal, que favorecen a las personas afrodescendientes, montubias e indígenas.

31. En cuanto a políticas de inclusión laboral, el Ministerio del Trabajo (MDT) impulsó la promulgación de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y de Reconocimiento del Trabajo en el Hogar<sup>15</sup>, que consagra los derechos a favor de la clase trabajadora, con el propósito de

---

<sup>13</sup> Constitución de la República del Ecuador, Art. 35.

<sup>14</sup> Suplemento Oficial N° 490, del 29 de abril de 2015.

<sup>15</sup> Suplemento Oficial N° 483, de 20 de abril de 2015.

evitar actos discriminatorios y de inequidad, siguiendo los preceptos de no discriminación por pertenencia a pueblos, nacionalidades, y grupos minoritarios.

32. En todo lo expuesto se evidencian los avances intersectoriales que el Estado ecuatoriano ha impulsado a través de normativa, institucionalidad y políticas públicas, para enfrentar la discriminación racial, con el fin de erradicarla progresivamente y lograr la transformación de las condiciones que históricamente han mantenido vigente a la exclusión de estos grupos<sup>16</sup>.

## **Tema 2: Medidas Especiales - Aplicación del párrafo 12**

33. La CRE, cuyo Art. 11 establece que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad, ha permitido diseñar una serie de mecanismos para promover la inclusión de las minorías étnicas, con plena vigencia de sus derechos colectivos, consagrados exclusivamente a favor de los pueblos y nacionalidades del Ecuador<sup>17</sup>.

34. La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)<sup>18</sup>, en su Art. 65, determina que el ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y garantice el libre acceso a los mismos. En el mismo sentido, establece que respecto de la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, se aplicarán acciones afirmativas.

35. El Ministerio Del Trabajo (MDT) promulgó, con fecha 12 de agosto de 2013, el Acuerdo Ministerial N° 86, mediante el cual se establece un procedimiento de carácter técnico y operativo para las Unidades de Administración de Talento Humano de las instituciones del Estado, con el objetivo de instaurar un proceso de selección que permita escoger a la persona más idónea entre las y los aspirantes para ocupar un puesto público. Este acuerdo define que, para los casos de concursos de méritos y oposición en el sector público, se deben reconocer acciones afirmativas a favor de las personas que se identifican con los siguientes grupos:

- a) Personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, o quienes estén a cargo de estas;
- b) Personas que hayan obtenido la calidad de héroes o heroínas nacionales;
- c) Ciudadanas y ciudadanos afroecuatorianos, indígenas y montubios;
- d) Personas emigrantes que hayan tenido anteriormente la calidad de servidores públicos (Revisar); y,
- e) Residentes de la provincia de Galápagos, en aplicación del Art. 28<sup>19</sup> de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Información remitida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.

<sup>17</sup> Constitución de la República del Ecuador, Art. 10, Art. 57, Art. 83.

<sup>18</sup> Suplemento Oficial N° 294, de 06 de octubre de 2010.

<sup>19</sup> Constitución de la República del Ecuador, Art. 28.- "Finalidad de los tributos. Los tributos que se creen en el Régimen Especial de la provincia de Galápagos deberán estar orientados a otorgar un beneficio al contribuyente por la prestación efectiva de un servicio público de buena calidad y que permita el cumplimiento de los siguientes fines: 1. Satisfacer las necesidades de la población observando los principios de accesibilidad, calidad, continuidad, eficiencia, equidad, generalidad, obligatoriedad, responsabilidad, uniformidad y universalidad. 2. Conservar el patrimonio natural del Estado. 3. Promover el desarrollo sostenible y equitativo del Régimen Especial de la provincia de

36. El Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial, en su Art. 3, convierte este principio laboral en una política pública<sup>21</sup>, indicando que en todas las instancias del Estado se procurará el acceso laboral de afroecuatorianos, indígenas y montubios en un porcentaje no menor a la proporción de su población.

37. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de Educación Superior, dictado por el Consejo de Educación Superior (CES)<sup>22</sup>, determina, en su Art. 31, que para el ingreso a un puesto de personal académico titular en una institución de educación superior pública o particular se convocará al correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. El concurso evaluará y garantizará la idoneidad de los aspirantes y su libre acceso bajo los principios de transparencia y no discriminación. Se aplicarán acciones afirmativas de manera que las mujeres y otros grupos históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades. En este mismo sentido se ha promulgado el Acuerdo Ministerial N° 12, dictado conjuntamente por el MDT y MSP, mediante el cual se dictó el Reglamento para el Reclutamiento y Selección de Profesionales de la Salud<sup>23</sup>, en que se determinan, en igual sentido, los lineamientos de selección de personal, en sus Arts. 23 y 24.

38. Asimismo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), en su Art. 3 determina que uno de los objetivos de la ley es instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medidas de acción afirmativas que promuevan la participación igualitaria a favor de titulares de derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad.

39. A través de las acciones afirmativas que otorgan puntajes adicionales por auto identificación étnica, en el 2014, quinientas once (511) personas auto identificadas como afroecuatorianas, cuatrocientas sesenta y dos personas (462) pertenecientes a nacionalidades indígenas, y cuatrocientas ochenta y siete (487) personas auto identificadas como montubios, ganaron concursos públicos de méritos y oposición.

40. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en concordancia con los mandatos constitucionales y aplicando medidas de acción afirmativa, entre los años 2012 y 2015, realizó cuatro convocatorias a concurso público de méritos y oposición<sup>24</sup>, en los que se garantizó la aplicación de los criterios de equidad y paridad de género, y se aplicó acciones afirmativas, adheridas al mandato del Plan Plurinacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, y en aplicación del Art. 4 del Decreto Ejecutivo N° 060. Es así que actualmente el total de terceros

Galápagos. 4. Contribuir para el desarrollo de iniciativas económicas, ambientales y turísticas de la ciudadanía. Para ello, las entidades que ejerzan competencia en el Régimen Especial de la provincia de Galápagos brindarán sus servicios de conformidad con sus competencias legales y constitucionales<sup>27</sup>.

<sup>20</sup> Información Remitida por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

<sup>21</sup> Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial, Art. 3.- Adóptese una política laboral de acciones afirmativas para sectores sociales históricamente discriminados, con el fin de generar de oportunidades de trabajo sin discriminación racial a todos los ciudadanos.

<sup>22</sup> Resolución del Consejo de Educación Superior 265, Documento Institucional 2012, de 31 de octubre de 2012.

<sup>23</sup> Acuerdo Ministerial N° 12, Registro Oficial N° 921, de 27 de marzo de 2013.

<sup>24</sup> Acuerdo Ministerial N° 000027, de 10 de abril de 2012, para llenar setenta vacantes del personal diplomático del Servicio Exterior con nombramiento de Tercer Secretario.

2. Acuerdo Ministerial N° 000027, de 28 de enero de 2013, para llenar 100 vacantes del personal Diplomático del Servicio Exterior, con nombramiento de Tercer Secretario.

3. Acuerdo Ministerial N° 000043, de 16 de abril de 2013, para llenar vacantes del Personal Auxiliar del Servicio Exterior, con nombramiento de Canciller 4.

4. Acuerdo Ministerial N° 000046, de 28 de mayo de 2015, para llenar vacantes de las diferentes categorías del personal Auxiliar del Servicio Exterior de los diferentes grupos ocupacionales.

secretarios que laboran en el MREMH está conformado en un 16% por afroecuatorianos, en un 19% por indígenas, en un 6% por montubios, y en un 59% por personas auto identificadas como mestizas, siendo esta una medida importante de construcción de la diplomacia ciudadana con la participación en la gestión pública de comunidades, pueblos y nacionalidades en un plano de igualdad.

41. Mediante Resolución 008-347-CPCCS-2015 de 22 de abril de 2015, el CPCCS instruyó a sus unidades internas la aplicación de la Resolución de la Asamblea Nacional del Ecuador, de fecha 7 de abril de 2015, mediante la cual se insta a las funciones del Estado a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 060.

42. Del mismo modo, el CPCCS incorporó un ítem sobre inclusión en los Formularios de Rendición de Cuentas, para uso de otras funciones del Estado, lo que revela un avance sustancial para la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural, incluyente y equitativo, considerando que dentro de la legislación ecuatoriana, el proceso de rendición de cuentas es obligatorio para las autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público.

43. El Ministerio del Interior (MDI), a través de la Dirección de Protección de Derechos y la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional (PNE), en coordinación con otros organismos nacionales e internacionales, ha desarrollado una serie de capacitaciones dirigidas a los servidores policiales y civiles. Se han realizado varias campañas para prevenir y erradicar la inseguridad y el delito, el crimen organizado y la violencia. En el año 2015, entre los meses de febrero y junio, el MDI, como medida de acción afirmativa a favor de la población indígena, realizó dos llamamientos para el Proceso de Reclutamiento de Aspirantes a Policías, en los que participaron jóvenes indígenas de las Asociaciones de los Pueblos Indígenas, pertenecientes a las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Bolívar, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, alcanzando un total de 658 - seiscientos cincuenta y ocho- aspirantes provenientes de nacionalidades indígenas.

### **Tema 3: La Población Ecuatoriana de Origen Romaní - Aplicación del párrafo 13**

44. Si bien es cierto que el número de romaníes en Ecuador, no corresponde a un grupo poblacional extenso, el Estado ecuatoriano garantiza y promueve la libre movilidad de todos los habitantes del planeta, considerando que todas las personas son iguales ante la ley y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, sin discriminación alguna por pertenencia a grupos minoritarios, sean nacionales o extranjeros.

45. En este firme compromiso, el MREMH entabló un diálogo directo con la población ecuatoriana de origen Romaní, en una reunión de trabajo con el Presidente de la Asociación Nacional del Pueblo Rom del Ecuador (ASOROM), Sr. Alfredo Yancovich, a fin de conocer las necesidades de este grupo poblacional, particularmente para definir mejores estrategias en cuanto al acceso a la salud, educación y vivienda, debido a la falta de documentos de identidad. Como resultado se informó que debido a sus concepciones ideológicas y culturales, no cuentan con un registro exacto de la población Rom en Ecuador.

#### Tema 4: Los Refugiados - Aplicación del párrafo 14

46. En base al párrafo 14, de conformidad con el Art. 3, numeral 1, de la CRE, el Estado deberá garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en ella y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Asimismo, la norma en mención dispone en sus Arts. 26, 32, y 326 que el Estado garantizará el derecho a la salud, la educación y el trabajo, esto bajo el mandato constitucional que determina que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que los nacionales<sup>25</sup>.

47. El Estado ecuatoriano, siendo un país de origen, destino y tránsito migratorio, a partir de septiembre del año 2008, implementó por primera vez una política pública en materia de Refugio, sin precedentes en América Latina<sup>26</sup>. Esta política fue efectuada en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967, la Declaración de Cartagena de 1984 y la Declaración y Plan de Acción de México de 2004, con un enfoque de solidaridad y corresponsabilidad con la comunidad internacional<sup>27</sup>.

48. A nivel nacional, esta política tiene dos vertientes: por un lado, garantizar una plena protección de la población vulnerable, en el sentido amplio de la palabra, incluyendo la garantía que deberá otorgarse para el efectivo ejercicio de sus derechos humanos y ciudadanos por parte de los refugiados extranjeros establecidos en nuestro país; y, por otro, la garantía que debe brindarse para una solución efectiva y duradera de la situación de los refugiados, que podría ser entendida como el retorno voluntario y digno de los refugiados a su país de origen, de existir dicha posibilidad<sup>28</sup>.

49. A partir de esta política, Ecuador implementó el programa Fronteras Solidarias impulsado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el objetivo de reconocer a los refugiados y a comunidades receptoras en situación de vulnerabilidad con especial énfasis en mujeres, jóvenes y población indígena y afroamericana que habita la zona fronteriza; promover en el territorio políticas públicas sociales de acceso a las oportunidades de desarrollo para la población desplazada, sin generar conflictos en la población receptora, garantizando además la convivencia pacífica y el buen vivir de toda la población; y, promover la integración socio-económica de las personas en situación de refugio a través de la generación de ingresos y el micro-crédito<sup>29</sup>.

50. En conocimiento de que la política del Estado en materia de refugio tenía la necesidad de ser afianzada y complementada a través de una institucionalización adecuada y de la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros por parte del Estado, Ecuador asumió el compromiso de contribuir con recursos propios a programas direccionados a la protección de los derechos de refugiados.

51. Es así que en diciembre del 2008, se inició el proceso conocido como “Registro Ampliado”, el cual a partir de marzo del año 2009 se ejecutó de forma continua hasta marzo del año 2010 a través de brigadas móviles, a lo largo de todas las provincias ubicadas en la frontera norte del país, reconociendo a un total de 32.000 personas de nacionalidad colombiana como refugiadas<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> Constitución de la República, Art. 9.

<sup>26</sup> Agenda Nacional para la Igualdad de la Movilidad Humana 2013-2017, pág. 17.

<sup>27</sup> Política del Ecuador en materia de refugio Véase en: [http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/Politica\\_del\\_Ecuador\\_en\\_materia\\_de\\_refugio.pdf?view=1](http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/Politica_del_Ecuador_en_materia_de_refugio.pdf?view=1).

<sup>28</sup> *Ibídem*.

<sup>29</sup> *Ibídem*.

<sup>30</sup> Boletín de Coyuntura del Sistema de Información sobre Migraciones Andinas, Mayo 2010.

52. Cabe mencionar que Ecuador es el país con el mayor número de refugiados en América Latina, con un aproximado de 60.000 personas receptadas actualmente, de los cuales el 95% son de nacionalidad colombiana<sup>31</sup>. En este sentido, el país responde ante la necesidad de otorgar protección a estas personas, sobre la base de su reconocimiento como refugiados, como una prioridad para el Gobierno ecuatoriano, que procura la protección efectiva de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de quienes se han visto obligados a abandonar su país de origen<sup>32</sup>.

53. El Ministerio de Educación (MINEDUC) emitió el Reglamento de Acceso al Sistema Educativo Ecuatoriano de Refugiados<sup>33</sup>, mediante Acuerdo Ministerial N° 337, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición migratoria vulnerable. El Acuerdo garantiza el acceso a la educación de niños, niñas y jóvenes que tengan documento de identificación como refugiados o solicitantes de refugio, o bien cédula o documento de registro civil de su país de origen, pasaporte u otros documentos de identificación; en su defecto, ha de otorgarse matrícula provisional.

54. En lo referente al acceso al trabajo, el Reglamento para la aplicación en el Ecuador del Derecho de Refugio, dispone, en su Art. 35, que mientras el Certificado Provisional de Solicitante mantenga su validez, permitirá a su titular realizar actividades económicas lícitas, independientes o bajo relación de dependencia. Igualmente, el Art. 46 del Reglamento dispone que mientras el documento de Identificación de los Refugiado/a(s) mantenga su validez, permitirá a su titular realizar actividades económicas lícitas, independientes o bajo relación de dependencia, permitiendo así el acceso a actividades laborales a este grupo poblacional.

55. Adicionalmente, el Acuerdo Ministerial N° 118, emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), deja sin efecto el requisito de Autorización Provisional de Trabajo para Refugiados<sup>34</sup>.

56. Es importante mencionar que las personas refugiadas con discapacidad tienen acceso al Programa Manuela Espejo (vivienda, crédito financiero, mobiliario, asistencia en equipos médicos e insumos) y Bono Joaquín Gallegos Lara (personas con enfermedades catastróficas), al igual que los nacionales.

57. En el mismo sentido, el Ministerio de Salud Pública, como máxima autoridad sanitaria, en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), enfocado en garantizar el derecho a la salud de las personas, familias y las comunidades bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, continuidad, participación, eficiencia, eficacia, calidad y calidez, ha orientado sus acciones a eliminar las barreras de acceso a una atención integral de salud. Para la implementación del MAIS, la Subsecretaría de Promoción de la Salud e Igualdad desarrolló, en el año 2014, la estrategia de servicios de salud inclusivos, que contiene cuatro componentes: libres de discriminación, libres de contaminación, participativos, y que promuevan acciones saludables. Ello se hizo con el fin de fortalecer las competencias del personal de la salud, para lograr una atención integral de calidad y calidez, a favor de toda la ciudadanía, sin discriminación alguna<sup>35</sup>. La CRE

---

<sup>31</sup> Información proporcionada por la Subsecretaría de Atención a Inmigrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

<sup>32</sup> Política del Ecuador en materia de refugio Véase en: [http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/Politica\\_del\\_Ecuador\\_en\\_materia\\_de\\_refugio.pdf?view=1](http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/Politica_del_Ecuador_en_materia_de_refugio.pdf?view=1).

<sup>33</sup> Registro Oficial N° 459, de 4 de noviembre de 2008.

<sup>34</sup> Registro Oficial N° 746, de 16 de julio de 2012.

<sup>35</sup> Constitución de la República del Ecuador, Art. 11(2).

garantiza a la población en situación de movilidad los mismos derechos que tienen los nacionales<sup>36</sup>.

58. Además, es preciso señalar que el Estado ecuatoriano, conjuntamente con el ACNUR, coordinan acciones para apoyar integralmente a las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, desde tres ejes de trabajo: la estimulación de la integración local, el reasentamiento y la repatriación voluntaria, la generación de políticas públicas, legislación nacional y prácticas administrativas que permitan tener acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente; y, la mejora de la información pública sobre refugiados y migrantes, para combatir la discriminación.

## **Tema 5: Los Trabajadores Migrantes y sus Familias**

### **- Aplicación del párrafo 15**

59. El Art. 40 de la CRE establece que ningún ser humano puede ser considerado ilegal, y propugna el principio de ciudadanía universal, como se mencionó en párrafos anteriores. Así, el Objetivo 12 del PNBV plantea acciones dirigidas a profundizar procesos solidarios y complementarios de integración con América Latina y el Caribe, de manera que se impulse la implementación de acuerdos migratorios, para construir la ciudadanía suramericana y garantizar los derechos de las personas en condición de movilidad humana, con atención a las necesidades especiales de protección de los grupos de atención prioritaria.

60. Igualmente, se creó la Agenda Nacional para la Igualdad en Movilidad Humana 2013-2017 (ANIMHU), que dirige los esfuerzos de todos los actores nacionales hacia la protección integral y restitución de derechos, garantía de los derechos del Buen Vivir, corresponsabilidad internacional, y participación. Puntualmente, a través de la política de *No discriminación*, se establece la prevención, control y sanción de las prácticas racistas, xenófobas y violentas cometidas contra personas dentro el país que se encuentren en situación de movilidad humana, asegurando la reparación integral de los derechos de las personas víctimas de dichos actos, e impulsando su prevención en el exterior.

61. Actualmente, existen políticas públicas y procedimientos que permiten el desarrollo integral de la movilidad humana en el Ecuador, a saber:

- Actualización de los requisitos para las visas de no inmigrantes en las distintas categorías, verificando que no se afecte el derecho establecido;
- Reforma de los estatutos migratorios y el régimen de zonas fronterizas con Perú y Colombia, acorde a la realidad del siglo XXI;
- Facilidad del proceso de visado y aplicación del Acuerdo Residencia Mercosur<sup>37</sup> para erradicar la condición migratoria irregular, que en Ecuador ha protegido en un año a dieciocho mil (18.000) ciudadanos de países de UNASUR;
- La reforma a los servicios ciudadanos para asegurar protección de la vida, integridad personal e integridad sexual.

62. Entre los meses de septiembre de 2014 y agosto de 2015 se han otorgado dos mil trescientas veinte (2.320) visas para no inmigrantes y cuatrocientas cincuenta y siete (457)

---

<sup>36</sup> Ley de Derechos y Amparo del Paciente, Art. 3.

<sup>37</sup> Registro Oficial N° 209, del 21 de marzo de 2014 y su reglamentación interna dispuesta en el Acuerdo Ministerial N° 000031, del 2 de abril del 2014, en el que se determina como beneficiarios de esta categoría de visa en el Ecuador a los nacionales de: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú.

visas para inmigrantes<sup>38</sup>, en la zona fronteriza norte. Además, entre enero de 2014 y octubre de 2015, se han entregado un total de ciento diez y ocho mil seiscientos ochenta y cinco (118.685) visas no inmigrantes.

63. Durante el año 2015, se emprendieron procesos de capacitación para los funcionarios y funcionaras del MREMH, que son quienes brindan atención a las personas en necesidad de protección internacional y refugiados. El objetivo de estas capacitaciones ha sido el de eliminar obstáculos que puedan afectar el ejercicio de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Igualmente se llevaron a cabo ocho (8) capacitaciones dirigidas a funcionarios de instituciones públicas y privadas, con el propósito de informar y sensibilizar sobre la protección internacional, el procedimiento de refugio en el Ecuador y los derechos y obligaciones de la población solicitante de refugio en el país.

64. Con respecto al combate de estereotipos y tendencias sobre los trabajadores migrantes, desde los medios de comunicación, el Art. 19 de la CRE estipula que se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política, y toda aquella que atente contra los derechos.

65. Además, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) propicia la generación de espacios de diálogo y acercamiento con los medios y organismos, a fin de evitar la discriminación a través de contenidos informativos. Es así que en junio de 2014, se realizó el seminario sobre cobertura informativa *Movilidad Humana al Día*, en que se instruyó a decenas de periodistas de distintos medios de comunicación, sobre refugio y movilidad humana en Ecuador. Las charlas fueron convocadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la DPE.

## **Tema 6: Lucha contra la Discriminación en los Medios de Comunicación - Aplicación del párrafo 16**

66. En relación con el párrafo 16 y en base a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el CORDICOM tiene competencia para analizar las temáticas transmitidas, así como para establecer estrategias a fin de que los medios eviten la reproducción de prácticas de exclusión y/o discriminación. Con el objetivo de generar procesos que permitan a la ciudadanía exigir sus derechos a la comunicación, entre ellos a la reparación ante criterios discriminatorios, el CORDICOM ha desarrollado guías metodológicas sustentadas en el análisis empírico, generando un marco de acción.

67. En este sentido, el CORDICOM se encuentra en proceso de implementación de un catálogo de contenidos interculturales producidos en el Ecuador, con miras a que sean difundidos por diversos medios de comunicación social. La difusión de productos interculturales busca fomentar espacios de encuentro entre personas de diferentes etnias y culturas, para que se conozcan entre sí, lo cual constituye un paso vital en la lucha contra la discriminación racial.

68. El CORDICOM, como organismo regulador de la comunicación e información, ha realizado actividades para el fortalecimiento del rol social de los medios de comunicación, promoviendo la edu-comunicación, a través de la capacitación de los trabajadores de los medios y la realización de campañas dirigidas a la población, con el fin de combatir prejuicios raciales.

---

<sup>38</sup> Esta referencia responde al servicio de visas en la Zona 1, que comenzó desde el mes de septiembre de 2014.

69. Además, se han realizado jornadas académicas de sensibilización a la ciudadanía y a profesionales de la comunicación, sobre violencia y discriminación y comunicación no discriminatoria. Durante el año 2015 se realizaron treinta y seis (36) reuniones con organizaciones sociales, y se brindó doce (12) asistencias técnicas pedagógicas en materia de contenidos interculturales y su reglamentación, contando con la participación de setecientos setenta y dos (772) personas.

70. Por otro lado, se desarrolló un estudio sobre interculturalidad y se llevaron a cabo talleres de sensibilización sobre producción de contenidos interculturales a ciudadanos y productores, a fin de fortalecer las identidades y el reconocimiento de la diversidad cultural a nivel nacional, como estrategia para superar procesos históricos de discriminación, y, en particular, de racismo. Durante el año 2015 se realizaron trece (13) reuniones con organizaciones sociales y se brindó cinco (5) asistencias técnicas pedagógicas en materia de contenidos interculturales y su reglamentación.

71. El uso del catálogo de contenidos interculturales garantizará la difusión masiva en los medios de comunicación de contenidos producidos por los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias, garantizando el respeto de la interculturalidad. En este sentido, mediante la articulación interinstitucional del Plan de Profesionalización y la implementación de sus estrategias, se han fortalecido las competencias profesionales de los trabajadores de la comunicación, poniendo énfasis en el rol social de los medios, a través de asistencia técnica pedagógica, talleres de información y capacitación, conversatorios y reuniones con medios y organizaciones sociales, con el propósito de promover la generación de contenidos que eliminen la discriminación de pueblos y nacionalidades<sup>39</sup>.

## **Tema 7: Participación, Consulta y Consentimiento**

### **- Aplicación del párrafo 17**

72. En respuesta a la implementación de las medidas necesarias para establecer procesos de consulta efectiva dentro de las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, se puede indicar que el Estado ecuatoriano, buscando que la democracia participativa y directa establecida en la CRE sea una realidad, ha emitido normativa para la participación eficaz de comunidades, pueblos y nacionalidades en las instancias públicas. Para ello, a través de la Asamblea Nacional, se han promulgado las siguientes leyes:

- Ley de Gestión Ambiental<sup>40</sup>, que otorga el derecho de participación en la gestión ambiental a toda persona natural o jurídica, en ejercicio de su derecho a ser informada sobre cualquier actividad realizada por las instituciones del Estado que pueda producir impactos ambientales (Art. 29).
- LOPC, que garantiza a las comunidades el derecho a ser consultadas sobre planes y programas de explotación de recursos que se encuentren en sus territorios, así como la participación en los beneficios de esos proyectos e indemnizaciones en caso de que provoquen perjuicios (Art. 81).
- LOFL<sup>41</sup>, que establece la posibilidad de que las y los ciudadanos en goce de los derechos políticos, así como las organizaciones sociales, puedan presentar proyectos de ley (Art. 54), propiciando su participación en el debate bien sea personalmente o por medio de sus delegados, previa solicitud y autorización de la Presidenta o

---

<sup>39</sup> Información remitida por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

<sup>40</sup> Registro Oficial Suplemento N° 418, del 10 de septiembre de 2004, promulgada por el Congreso Nacional.

<sup>41</sup> Registro Oficial N° 642, de 27 de julio de 2009.

Presidente de la Asamblea Nacional. Además, la ley prevé la participación de las y los ciudadanos en el procedimiento para la formación de nueva normativa, concediendo al menos quince días para presentar observaciones a los proyectos de ley en tratamiento, cuando tengan interés en su aprobación o consideren que sus derechos pueden ser afectados por su expedición.

- La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUAA)<sup>42</sup>, que protege y hace efectivos los derechos colectivos de pueblos, comunas y nacionalidades indígenas ante el uso, acceso y aprovechamiento del agua. En ella se establece el derecho que tienen estos grupos a ser consultados de forma obligatoria, previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, acerca de toda decisión normativa o autorización estatal relevante que pudiera afectar la gestión del agua que discurre por sus tierras y territorios (Art. 71, literal f).

73. Por su parte, la CRE, en su Art. 57, numeral 17, reconoce el derecho a la Consulta Pre-legislativa a las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, debiendo aplicarse antes de la adopción de una medida legislativa que pudiere afectar sus derechos colectivos. Con el fin de que el derecho a la Consulta Pre-legislativa se aplique efectivamente, la Corte Constitucional, mediante Sentencia N° 001-10-SIN-CC, de 18 de marzo de 2010, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 176 de 21 de abril de 2010, determinó que la Asamblea Nacional es el órgano constitucional responsable de llevarla a cabo, y dispone que este órgano establezca, mediante acto administrativo, el procedimiento para realizarla.

74. Dando cumplimiento al fallo constitucional anterior, y en ejercicio de las atribuciones previstas en los Arts. 13 y 14 de la LOFJ, el Consejo de Administración Legislativa expidió el Instructivo para la Aplicación de la Consulta Prelegislativa, codificado con fecha 19 de febrero de 2013 y 24 de septiembre de 2013, respectivamente. Es importante indicar que la Asamblea Nacional ha realizado la Consulta Pre Legislativa en el siguiente proceso de elaboración de norma, que tiene incidencia sobre los pueblos y nacionalidades:

- Proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, fue presentado a la Asamblea Nacional en marzo del 2012. Actualmente, se encuentra en conocimiento de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que, desde el 3 de septiembre de 2014, aprobó y viene desarrollando un cronograma para la socialización y libre participación en Comisiones Generales de la ciudadanía. El objeto de este Proyecto de Ley es normar el uso y acceso a la tierra rural, que deberá cumplir una función social y ambiental. Además, regulará la posesión, propiedad, administración y redistribución de la tierra, como factores que permitan garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado, y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos. En especial, su objetivo constituye el reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios ancestrales pertenecientes a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afro-ecuatoriano y al pueblo montubio. El proceso legislativo del Proyecto de Ley, hasta el momento, ha incluido veintitrés (23) audiencias provinciales, con la participación de aproximadamente seis mil quinientas (6.500) personas representantes de organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas.

<sup>42</sup> Registro Oficial N° 305, de 06 de agosto de 2014.

- El número de organizaciones inscritas en las audiencias provinciales, fue de cuarenta y ocho (48), de las cuales participaron efectivamente veintitrés (23); adicionalmente, concurren otras quinientas noventa y cuatro (594) organizaciones, por lo que el total asciende a seiscientos diez y siete (617) organizaciones a nivel nacional.

75. El Estado Ecuatoriano, como uno de los pioneros en la región, instauró la Consulta Previa Libre e Informada, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 57, numeral 7, de la CRE<sup>43</sup>, Arts. 81 y 83 de la LOPC<sup>44</sup>, así como en el Decreto Ejecutivo N° 1247<sup>45</sup>, que contiene el Reglamento para la ejecución de la Consulta Previa Libre e Informada en los Procesos de Licitación y Asignación de Áreas y Bloques Hidrocarburíferos, restituyendo el derecho de participación efectiva, que genera igualdad de oportunidades para que las inquietudes y opiniones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas incidan en la planificación y toma de decisiones respecto al desarrollo hidrocarburífero sustentable.

76. En este sentido, se coordinaron e implementaron procesos de diálogo genuino e intercultural con las siguientes organizaciones, comunidades pueblos y nacionalidades indígenas ubicadas en las provincias de Pastaza, Morona Santiago y parte de Napo y Orellana, correspondientes a los 13 bloques que forman parte de la Ronda Suroriente Ecuador:

- Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE)
- Nacionalidad Andwa del Ecuador (NAPE)
- Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE)
- Nacionalidad Kichwa del Ecuador
- Organización Shuar del Ecuador (OSHE)

<sup>43</sup> Constitución de la República del Ecuador, Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.”

<sup>44</sup> *Ibidem*, Art. 81.- Consulta previa libre e informada.- Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable. Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, a través de sus autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos proyectos reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo consultado, se procederá conforme a la Constitución y la ley.” “Art. 83.- Valoración.- Si de los referidos procesos de consulta deriva una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa superior correspondiente; la cual, en el caso de decidir la ejecución, deberá establecer parámetros que minimicen el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas; además, deberá prever métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, así como, de ser posible, integrar laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana.”

<sup>45</sup> Registro Oficial 759, de 02 de agosto de 2012.

- Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shuar de Pastaza y Morona Santiago
- Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Achuar de Pastaza
- Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shiwiar
- Mestizos y Colonos
- Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GADs), de las provincias de Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago

77. Las actividades planificadas y organizadas con las diferentes autoridades y consejos de gobierno de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, se han enmarcado en los principios de legitimidad y representatividad, así como en firme respeto a lo establecido en la CRE en tanto conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, generación y ejercicio de autoridad en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.

78. La Secretaría de Hidrocarburos, conjuntamente con los representantes de las entidades coadyuvantes, y bajo la supervisión del Ministerio de Hidrocarburos, ejecutó cuatro procesos de consulta previa, libre e informada<sup>46</sup>, entre los años 2012 y 2015, según el siguiente detalle:

- 2012: Consulta Previa Libre e Informada para la Décima Primera Ronda Suroriente Ecuador o Consulta Amazónica
- 2013: Consulta Previa Libre e Informada en el Bloque 10 para el área Jibimkipi
- 2013: Consulta Previa Libre e Informada para el Bloque 43 ITT
- 2014-2015: Consulta Previa Libre e Informada para los Bloques 74-75

79. Para la convocatoria a Consulta Previa, Libre e Informada se consideran aspectos como la pertenencia territorial de los pueblos indígenas, idioma y formas de organización. La convocatoria se realiza a través de sus órganos estructurales representativos. Además, se coordina cualquier proceso con los líderes y representantes de las comunidades, con la finalidad de socializar y convocar a las comunidades a participar en cada una de las actividades y procesos. Otros mecanismos de convocatoria a la Consulta Previa, Libre e Informada, implementados de manera oportuna, son los oficios dirigidos a los representantes de las comunidades, los anuncios en medios de comunicación locales -radio, prensa escrita-, así como los medios utilizados de forma regular por las organizaciones locales, como invitaciones puerta a puerta.

80. Además, el Ministerio del Ambiente (MAE), como autoridad ambiental competente, de manera previa a la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para las fases de Explotación y Beneficio de distintos proyectos, realiza procesos de participación social dirigidos, principalmente, hacia las comunidades del área de influencia del proyecto a través de convocatorias públicas (medios de comunicación masivos y comunicaciones

---

<sup>46</sup> El Decreto Ejecutivo 1247, en su Art. 5, numeral 4, define a la Consulta Previa como un instrumento de participación e información, que de manera obligatoria, la Secretaría de Hidrocarburos realizará, previo a la eventual adjudicación o asignación de los bloques o áreas, en sujeción a lo dispuesto en el Art. 57 de la CRE; los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que se refieran a consulta previa y que estén debidamente ratificados por la República del Ecuador y Art. 4 de este reglamento, y demás cuerpos legales que la normen, con la finalidad de garantizar el acceso a la información sobre el plan o programa que eventualmente podría ser desarrollados; y, brindar legitimidad, seguridad y certeza jurídica a las políticas tendientes al aprovechamiento de los recursos hidrocarbúferos del país.

dirigidas a actores sociales involucrados), apertura de Centros de Información Pública y asambleas de presentación pública.

81. El Estado Ecuatoriano garantiza a las comunidades el ejercicio de su derecho colectivo a ser informadas, de conformidad con la CRE y los convenios internacionales, a través de un diálogo de buena fe, adecuado, accesible y de carácter previo, demostrando el compromiso estatal con todas las comunidades y pueblos indígenas.

### **Tema 8: La Falta de Procesos Judiciales por Discriminación Racial - Aplicación del párrafo 18**

82. En relación con la recomendación sobre la capacitación de los tribunales nacionales para el tratamiento de casos de discriminación racial, el Estado ecuatoriano, mediante el Consejo de la Judicatura, creó la Escuela de la Función Judicial, que se encarga de la formación de todos los operadores de justicia, con carácter obligatorio al inicio de sus funciones. En la malla de formación inicial se tratan diversos temas referentes a la recomendación, a saber:

- Principio de Igualdad: Igualdad real, formal y material
- Principio de no discriminación
- Principio de inclusión
- Interculturalidad y principios
- Pluralismo Jurídico en la administración de justicia
- Marco normativo nacional e internacional de protección de la justicia indígena en el Ecuador

83. A través de la Policía Nacional se estableció un Programa de Capacitación Integral Continua (PCIC) en las provincias de Cotopaxi, Manabí, Guayas y Tungurahua. Así, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 060 de la Política Pública del Plan Plurinacionalidad para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, todos los rangos son capacitados en temas como: Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas Montubios y Afrodescendientes; Plurinacionalidad e Interculturalidad, Justicia Indígena; Derecho Constitucional y Movimientos Indígenas, Montubios y Afroecuatorianos; Garantías y Violaciones de los Derechos Colectivos; Sujetos Colectivos de Derechos; Desafíos de la Interculturalidad; y, Análisis y Discusión de Casos sobre la vigencia de los Derechos Colectivos. Durante el 2014, 31.857 servidores policiales fueron capacitados.

84. Con el fin de fortalecer los esfuerzos y asegurar un acceso igualitario a los servicios judiciales, el Art. 191 de la CRE establece la existencia de la Defensoría Pública (DP) como órgano que garantizará el pleno e igual acceso a la justicia por parte de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus intereses.

85. Actualmente existen setecientos sesenta (760) defensores públicos, que han recibido capacitación especializada en temas de justicia indígena, pluralismo jurídico y conocimientos de la cultura indígena. La Función Judicial cuenta con cuarenta y tres (43) peritos traductores o intérpretes, y permanentemente se realizan capacitaciones al personal en la acreditación de intérpretes en diversos idiomas y en lenguas ancestrales, para la oportuna asistencia a personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, así como acreditación de intérpretes en lenguaje de señas, para personas con discapacidad auditiva.

86. Para el acceso a los servicios de Justicia, el Consejo de la Judicatura cuenta con una Dirección cuya misión es la de desarrollar propuestas e iniciativas orientadas a promover el óptimo acceso de la ciudadanía a los servicios judiciales. Está integrada por cuatro subdirecciones nacionales: Derechos Humanos, Género, Acceso a los Servicios de Justicia y Pluralismo Jurídico y de Mediación, y Justicia de Paz.

87. Actualmente, Ecuador cuenta con el COIP<sup>47</sup>, vigente desde el 10 de agosto del 2014, el cual codifica las sanciones respectivas para delitos que atenten contra derechos individuales y colectivos de pueblos y nacionalidades. En este sentido, el Art. 176, comprendido dentro del capítulo de delitos contra el derecho a la igualdad, tipifica la discriminación como delito penado con uno a tres años de privación de libertad, entendiéndose como la acción de distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón etnia, identidad cultural, entre otros aspectos, e incrementándose la pena de tres a cinco años en caso de que el delito sea cometido por servidores públicos.

88. Igualmente, el Art. 177 del mismo cuerpo legal tipifica el delito de odio, entendido como los actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su etnia, identidad cultural, entre otros aspectos, sancionándolo con pena de privación de libertad de uno a tres años. En el mismo sentido, el Art. 80 sanciona al delito de etnocidio con privación de libertad de dieciséis a diecinueve años, en orden con la protección de la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario. Finalmente, el Art. 82 tipifica el delito de esclavitud, penando a quien ejerza todos o algunos atributos del derecho de propiedad sobre otra persona con privación de libertad de veintidós a veintiséis años.

89. Desde el año 2014 se han presentado cuarenta y seis (46) acciones a nivel nacional, treinta y uno (31) por presuntos delitos de discriminación y quince (15) por presuntos delitos de odio. No existen datos desglosados relativos a las minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o nacionales en relación con el sistema de justicia penal; sin embargo, actualmente se está implementando el Proyecto Gestión para la formación del Consejo de la Judicatura, que tiene como objetivo estratégico la coordinación de los procesos de generación, validación, estandarización y difusión de los datos e información institucional; articulación de normativas, procedimientos y herramientas técnicas orientadas a capturar datos e información, almacenarlos, procesarlos, sistematizarlos estandarizados, validarlos, oficializarlos y distribuirlos, con el fin último de apoyar y mejorar la gestión institucional, optimizar la toma de decisiones y satisfacer las necesidades de información de clientes internos y externos a través de un portal web. El uso de esta herramienta permitirá contar con información desglosada en cuanto a los usuarios del sistema de justicia a nivel nacional.

90. En el mes de noviembre del año 2015, se dictó sentencia contra un teniente de las Fuerzas Armadas por el delito de odio racial, cometido contra una persona afro-ecuatoriana, lo cual pone en evidencia la aplicación de sanciones contra la discriminación racial. En el país, este es el primer proceso judicial con sentencia en el ámbito de la discriminación racial, lo que sienta un importante precedente. En el año 2013 se presentó una queja a la DPE por tratos degradantes e inhumanos cometidos por un teniente a un oficial de rango inferior, mientras formaba parte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL). Tras la investigación, la DPE declaró que se vulneraron los derechos a la integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación por razón de etnia. El caso se judicializó en el año 2013, y se dictó orden de prisión preventiva en contra el demandado, por la presunta comisión de un delito de odio racial. En el año 2015, se dictó sentencia en su contra, imponiéndole una pena de privación de libertad de cinco meses y cuatro días, resolviéndose

---

<sup>47</sup> Suplemento Oficial N° 180, de 10 de febrero de 2014, última reforma realizada a 26 de octubre de 2015.

además que la Institución Militar pidiera disculpas públicas al demandante en una ceremonia militar especial<sup>48</sup>. El CPCCS, a través la Sub-coordinación de Control Social y la Coordinación General de Interculturalidad, observó el cumplimiento del debido proceso dentro del caso<sup>49</sup>.

## **Tema 9: Coordinación de la Justicia Indígena y la Ordinaria**

### **- Aplicación del párrafo 19**

91. La CRE reconoce el derecho a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social, en concordancia con el reconocimiento del derecho colectivo a crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario<sup>50</sup>, derechos reafirmados en el Art. 171, que reconoce a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su Derecho propio.

92. La Corte Constitucional, en su sentencia N° 113-14-SEP-CC (Caso la Cocha) de 30 de julio de 2014, referente a un caso que ameritaba dirimir la competencia entre justicia ordinaria o indígena, realizó un profundo análisis respecto al ejercicio de las facultades jurisdiccionales y la competencia por parte de las autoridades indígenas, confirmando que la administración de justicia indígena conserva su jurisdicción para conocer y dar solución a los conflictos internos que se producen entre sus miembros dentro de su ámbito territorial y que afecten sus valores comunitarios.

93. Del mismo modo, en cuanto a procesos en los que los sujetos sean miembros de pueblos y nacionalidades indígenas, la Corte Constitucional, mediante sentencia N° 004-14-SCN-CC<sup>51</sup> de 06 de agosto de 2014, determinó que en aras de proteger y garantizar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, a fin de tener una adecuada y verdadera administración de justicia, se debe observar los principios con una perspectiva intercultural. De ahí que, los/as operadores de justicia están obligados a considerar la especial cosmovisión de los pueblos indígenas con respecto a todos los órdenes de la vida, incluso el juzgamiento de delitos penales.

94. El Estado Ecuatoriano, a través del Consejo de la Judicatura, ha desarrollado el Plan de Pluralismo Jurídico, que contiene las siguientes estrategias de trabajo:

- Proporcionar a los jueces y juezas con una herramienta técnica para el juzgamiento en el sistema penal ordinario a indígenas involucrados en delitos penales.
- Formular una malla curricular para la capacitación a los jueces, juezas, fiscales y defensores públicos en temas de pluralismo jurídico.
- Conocer la situación de coordinación y cooperación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena, en las ciudades y provincias con mayor población indígena.
- Conocer y comentar el proyecto de ley de coordinación y cooperación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena que reposa en la Asamblea Nacional.
- Comparar las buenas prácticas con prácticas regionales, respecto a legislación y otros mecanismos de coordinación y cooperación entre las justicias ordinaria e indígena.

<sup>48</sup> Información Remitida por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

<sup>49</sup> Información remitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

<sup>50</sup> Constitución de la República del Ecuador, Art. 57, numeral 1 y 10.

<sup>51</sup> Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N° 004-14-SCN-CC, Caso N° 0072-14-CN, del 6 de agosto de 2014.

95. Además, se ha trabajado en el desarrollo de un plan de capacitación para autoridades judiciales indígenas, así como en procesos de intercambio de conocimientos y saberes respecto de la administración de justicia indígena y justicia ordinaria<sup>52</sup>.

## **Tema 10: Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios**

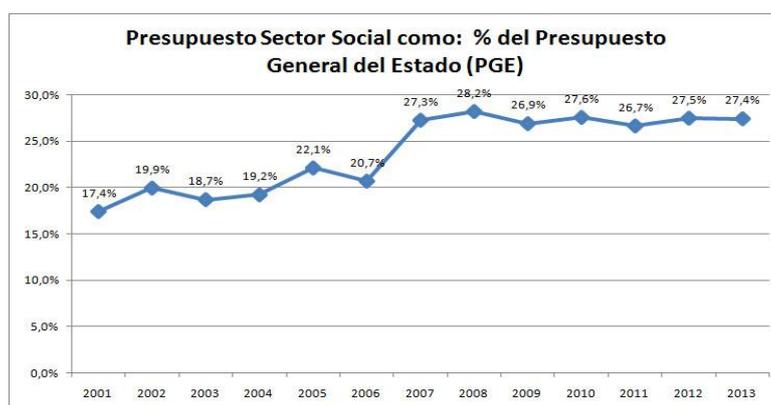
### **- Aplicación del párrafo 20**

96. El Estado Ecuatoriano ha impulsado e implementado políticas públicas y de inversión a favor de la erradicación de la pobreza y el fomento de la inclusión social, la eliminación de la discriminación de pueblos, nacionalidades y minorías, y el acceso a servicios básicos, educación y empleo, desde la multicausalidad.

97. Como consecuencia de las transformaciones que ha vivido el país, el coeficiente Gini, índice que mide la desigualdad de los ingresos entre la población, se ubicó en 0.4601 en marzo del 2014, esto significa que se redujo en 4 puntos entre 2006 y 2014. Alrededor de 1,3 millones de personas han salido de la pobreza.

98. Como se ilustra en el Gráfico 1, la inversión social en relación al Presupuesto General del Estado (PGE) se incrementó de 17,4% en 2001 al 20,7% en 2006 y al 27,4% en 2013. Esto implica un aumento del presupuesto de USD 500 millones en el 2000, a USD 6.400 millones en el 2013, tendencia que se mantuvo en los años subsiguientes.

**Gráfico 1**



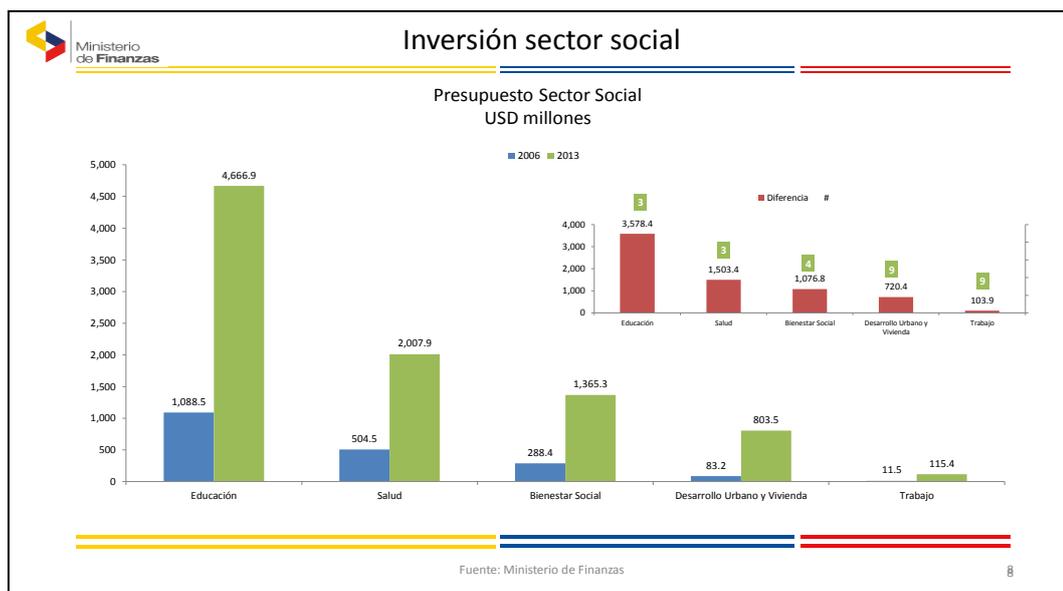
*Fuente:* Ministerio de Finanzas - e-SIGEF.

Elaboración: SIISE.

99. Adicionalmente, en el Gráfico 2 se compara la inversión en el sector social entre los años 2006 y 2013. Como se puede observar se ha priorizado la inversión en salud, educación, bienestar social, vivienda y trabajo. Esto permitió mejorar las condiciones socioeconómicas de la población ecuatoriana, incluyendo a pueblos y nacionalidades.

<sup>52</sup> Información Remitida por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Gráfico 2



100. De esa manera, el MIES brinda servicios públicos para toda la población ecuatoriana, incluyendo grupos de atención prioritaria -niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad- pertenecientes a pueblos y nacionalidades. En el año 2013 se realizó un levantamiento de información sobre auto-identificación étnica de los usuarios de los servicios. En los servicios de Desarrollo Infantil Integral, para niños y niñas de 0 a 3 años, 76% eran mestizos, seguidos de un 11% de indígenas, correspondiente a treinta y tres mil novecientos cincuenta (33.950) niños, de entre los cuales 6% eran afroecuatorianos, esto es diecisiete mil quinientos sesenta (17.560) niños y 3% mulatos, esto es nueve mil doscientos diez y nueve (9.219) niños.

101. En los servicios para la población adulta mayor, el 86% eran mestizos y el 6% indígenas (1.022). Accedieron a estos servicios quinientas sesenta y tres (563) personas afrodescendientes, mulatas y negras, y trescientas sesenta y dos (362) personas montubias.

- En los servicios para personas con discapacidad, 87% de las personas atendidas eran mestizos, 4% indígenas, correspondiente a novecientos veinte y cuatro (924) personas, 4% montubios, correspondiente a setecientos noventa y siete (797) personas y las demás se auto identificaron con otra etnia.
- En los servicios de protección especial, 81% de las personas atendidas eran mestizos, 11% indígenas, correspondiente a seis mil setecientos noventa y seis (6.796), 4% afrodescendientes, correspondiente a dos mil cuatrocientos veinte y nueve (2.429) personas y las demás se auto identificaron con otras etnias.
- Por último, en atención a jóvenes, 62% de las personas atendidas eran mestizas, seguidas de un 27% de montubios, correspondiente a veinte y siete mil doscientos setenta y un (27.271) jóvenes.

102. En cuanto a las políticas de inclusión económica y reducción de la pobreza, hasta julio de 2015, el 67% de las personas que reciben transferencias monetarias (mediante el Bono de Desarrollo Humano para personas en pobreza o el bono Joaquín Gallegos Lara para cuidadores de personas con altos niveles de discapacidad) o pensiones por adulto mayor o discapacidades, son mestizas. Enseguida, se ubican los indígenas con un 14%, correspondiente a ciento cincuenta y siete mil veintiún (157.021) personas. Los montubios representan el 12%, con ciento treinta y tres mil ciento veinte y cuatro (133.124) personas.

Entre afrodescendientes y mulatos abarcan el 4%, es decir cuarenta mil cuatrocientos sesenta y tres (40.463) personas.

103. Los programas de inclusión económica y social están encaminados a toda la población que los requiere, y deben intervenir en los diferentes grupos étnicos, como es el caso de los afrodescendientes y montubios, como lo establece la Convención. Existe una serie de estrategias implementadas por los diferentes servicios para fortalecer su enfoque intercultural, contando con la participación activa de la ciudadanía. Así, se busca fortalecer las medidas afirmativas para que personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos sean contratados, capacitados y formen parte de los servicios de profesionalización ofrecidos.

104. En cuanto a la información desagregada por auto identificación étnica, los sistemas de información están en constante innovación para ingresar todas estas variables en la plataforma informática del MIES.

105. Con respecto al acceso a la educación de pueblos y nacionalidades, se han logrado importantes avances a nivel nacional. En este sentido, la tasa de asistencia escolar neta de niños y niñas inscritos de 6 a 11 años en el nivel de primaria, con respecto a pueblos y nacionalidades se ha incrementado significativamente, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 1  
**Tasa neta de asistencia (6 a 11 años de edad) en el nivel de primaria por periodo**

<i>Auto identificación étnica</i>	<i>Dic-12</i>	<i>Dic-13</i>	<i>Dic-14</i>
Indígena	96,91%	95,73%	97,01%
Afro-ecuatoriano	96,70%	98,19%	96,55%
Mestizo	95,87%	96,49%	96,90%
Blanco	96,51%	98,81%	96,42%
Montubio	97,41%	96,12%	96,62%
Otro	100,00%	89,45%	100,00%

*Fuente:* Ministerio de Educación.

106. En el mismo sentido, la tasa de asistencia neta de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en el nivel de secundaria también presentó avances significativos, como se demuestra en la tabla a continuación:

Tabla 2  
**Tasa neta de asistencia (12 a 17 años de edad) en el nivel de secundaria**

<i>Auto identificación étnica</i>	<i>Dic-12</i>	<i>Dic-13</i>	<i>Dic-14</i>
Indígena	69,21%	78,35%	76,09%
Afro-ecuatoriano	73,55%	74,50%	74,87%
Mestizo	81,74%	82,56%	83,71%
Blanco	73,55%	91,14%	72,99%
Montubio	60,72%	66,93%	67,23%
Otro	100,00%	89,20%	61,43%

*Fuente:* Ministerio de Educación.

107. Para garantizar el respeto a la identidad cultural, se han creado instituciones educativas responsables de preservar la lengua, conocimientos y saberes ancestrales de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, cuyos objetivos son: fortalecer, guardar y revitalizar las lenguas, conserva y promover los conocimientos y saberes ancestrales, custodiar las cosmovisiones de las nacionalidades, promover el diálogo de saberes entre conocimiento ancestral y occidental.

108. Como se detalla en la siguiente tabla, actualmente existen 1.795 establecimientos de educación bilingüe intercultural, que cuentan con 8.303 docentes. A través de estos servicios, el MINEDUC atiende a una población de 146.346 niñas y niños pertenecientes a Pueblos y Nacionalidades Originarios.

Tabla 3  
**Atención SEIB**

<i>Atención SEIB Zona</i>	<i>Instituciones</i>	<i>Docentes</i>	<i>Estudiantes</i>
Zona 1	266	1.276	25.123
Zona 2	316	1.582	26.881
Zona 3	533	2.821	45.646
Zona 4	12	59	1.207
Zona 5	94	407	7.926
Zona 6	427	1.341	25.610
Zona 7	129	493	6.284
Zona 8	8	132	3.187
Zona 9	10	192	4.482
<b>Total</b>	<b>1.795</b>	<b>8.303</b>	<b>146.346</b>

*Fuente:* SEIB, MIEDUC, 2016.

109. Adicionalmente, la SENESCYT ha implementado estrategias de comunicación que permitan una adecuada difusión de la oferta de becas destinadas al fomento del talento humano de ciudadanos pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Para el efecto, se ha coordinado con el Instituto de Fomento al Talento Humano el desarrollo de estrategias descentralizadas de difusión de la información, con miras a llegar a territorios donde existe mayor concentración de ciudadanos pertenecientes a pueblos y nacionalidades.

110. De igual manera, y en observancia al principio de progresividad de derechos, las bases de postulación para la adjudicación de las becas están sujetas a reformas que permiten ampliar el número de asignaciones para personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades.

111. El Estado Ecuatoriano ha propiciado la participación de las Carteras de Estado, con el fin de optimizar el accionar de las áreas encargadas de promover la participación ciudadana, el control social, la transparencia y la rendición de cuentas.

112. El PNVB planteó la meta que apunta a combatir la falta de acceso al empleo - específicamente en el sector público- para grupos poblacionales pertenecientes a pueblos y nacionalidades, señalando que la falta de empleo es una consecuencia de la desigualdad y la discriminación, como lo es también la falta de acceso a la educación. A este segundo problema apunta la meta 2.7, con miras a la implementación de políticas públicas encaminadas reducir el analfabetismo en la población indígena y montubia entre 15 y 49 años de edad al 4%.

113. En relación a las inversiones, a través de las competencias del MINFIN, el Clasificador de Orientación de Gasto en Políticas de Igualdad Intercultural permite el registro y seguimiento de recursos públicos destinados a políticas con enfoque intercultural y a la garantía de derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, y, contempla la categoría Promover y reforzar la lucha contra el racismo, la discriminación y la intolerancia. El Clasificador de Orientación de Gasto en Políticas de Igualdad Intercultural entró en vigencia en el año 2014 y el MINFIN ha realizado socializaciones dentro de las instituciones públicas para el registro respectivo de recursos destinados a las políticas interculturales.

114. De conformidad con lo previsto en el Art. 7 de la Ley Orgánica del CPCCS, corresponde a esta entidad establecer y reglamentar mecanismos de apoyo financiero, jurídico y técnico, bajo el reconocimiento a la autonomía de la sociedad civil, a través de la modalidad de fondos concursables a favor de los espacios de participación ciudadana que lo soliciten, a fin de fomentar la participación ciudadana, el control social, la transparencia y lucha contra la corrupción. El Programa de Fondos Concursables fue declarado como prioritario por SENPLADES en el año 2012. Su ejecución inició en el año 2013 y proyecta su implementación completa hasta el año 2017. El programa de Fondos Concursables es un mecanismo de incentivo a las buenas prácticas en las temáticas antedichas, y se ejecuta a través de la entrega de un aporte económico de carácter no reembolsable, a las organizaciones sociales que resulten seleccionadas. Es un programa que valora y pretende fortalecer las formas auto organizativas de la sociedad y sus iniciativas.

115. En su primera convocatoria, realizada en el año 2013, el Programa apoyó iniciativas ciudadanas para fortalecer la participación social y la organización de mujeres en zonas rurales del Ecuador. Dicha convocatoria contó con la participación de setenta y dos (72) postulantes; finalmente, el CPCCS entregó diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 10.000.00) en fondos concursables a las trece (13) mejores propuestas dirigidas a mujeres, con énfasis en población indígena, afrodescendiente y montubia. Los proyectos financiados contribuyeron, entre otros fines, al fortalecimiento de la organización y movilización de las agrupaciones de mujeres, promoviendo la participación ciudadana y el respeto por sus derechos. Los resultados obtenidos tras la ejecución de los trece proyectos ganadores dan cuenta de la efectiva transversalización de los enfoques de género, interculturalidad, generacional y de discapacidades. Al estar dirigidos a mujeres de poblaciones indígenas, afro-ecuatorianas y montubias de zonas rurales del país, permitieron atender a sectores ciudadanos vulnerables, ejerciendo simultáneamente las acciones afirmativas que manda la CRE y que se amparan en instrumentos internacionales.

116. En cumplimiento al mandato Constitucional y a la LOEOP, el CNE impulsó una serie de programas, cuyo objetivo principal es el de promover el acercamiento y compromiso de la ciudadanía con los procesos electorales, llevándose a cabo tanto en las elecciones generales del año 2013 como en las elecciones seccionales del año 2014. Para tal fin, emprendió proyectos emblemáticos a razón de la promoción del respeto hacia los derechos políticos, consagrados en el Capítulo Quinto del Título Segundo de la CRE, referente a los Derechos de Participación. Principalmente se consideró a sectores minoritarios de la población que han permanecido al margen de la vida política ecuatoriana según su realidad, tomando como eje transversal el fortalecimiento de la democracia, mediante la organización de procesos electorales y el apoyo a las organizaciones políticas y sociales, asegurando una participación equitativa, igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y justa para elegir y ser elegidos.

117. Por otro lado, el Estado ecuatoriano, a través del INEC, ha implementado el Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH), cuyo propósito es el de coordinar el relevamiento de información de diferentes temáticas dentro de los hogares, a saber: características demográficas, migración, empleo, educación, salud y nutrición, ingresos y

consumo, condiciones de vida, asentamientos humanos y vivienda, justicia y crimen, uso del tiempo, mortalidad y fecundidad, trabajo infantil, violencia intrafamiliar y maltrato infantil, servicios básicos y acceso a la propiedad. El diseño de las operaciones estadísticas del SIEH desglosa la información por grupos etarios, género, origen étnico, ubicación geográfica, etcétera, en referencia a las esferas de la Convención. Toda la información producida por el INEC es bien público social y constituye un soporte para la toma de decisiones a todo nivel, la cual se encuentra disponible en el siguiente portal electrónico: [www.ecuadorencifras.gob.ec](http://www.ecuadorencifras.gob.ec).

118. Las políticas del Estado Ecuatoriano están orientadas a la inclusión socio-laboral de todos los ciudadanos, tal como se ha demostrado a lo largo de este informe, y como se desprende igualmente del Acuerdo Ministerial N° 56, dictado por el Ministerio de Relaciones Laborales sobre el “Subsistema Reclutamiento y Selección de Personal del Sector Público”, las acciones afirmativas que favorecen el empleo de afrodescendientes y montubios fueron detalladas en el apartado correspondiente al Tema 2.

119. En cuanto al acceso al trabajo, los objetivos 1 y 2 del PNBV contienen el mayor número de políticas orientadas a combatir la discriminación en todas sus formas, poniendo énfasis en los pueblos y nacionalidades. Estas líneas orientadoras de la política pública alcanzan un nivel de concreción en las metas que el Plan Nacional de Desarrollo prevé para cada uno de sus objetivos, mismas que son de obligatorio cumplimiento, por lo que se convierten en compromisos ineludibles para las entidades rectoras de la política pública. En este sentido, conviene destacar las metas 1.6 y 2.7 (citada anteriormente) que atacan directamente a algunas de las expresiones concretas de la discriminación social:

- Meta 1.6: Alcanzar el 14% de ocupados afro-ecuatorianos, indígenas y montubios en el sector público
- Meta 2.7: Reducir el analfabetismo en la población indígena y montubia entre 15 y 49 años al 4%.

### **Tema 11: Acceso Masivo a la Salud Pública que responda a la Realidad Étnica - Aplicación del párrafo 21**

120. La CRE garantiza la universalidad de la salud y promueve el respeto a la medicina ancestral. En este sentido, el Art. 32 determina que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

121. Además, en los Arts. 358, 359 y 360, determina que el Sistema Nacional de Salud reconoce la diversidad social y cultural y se guía por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional; además, señala que articulará los diferentes niveles de atención y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.

122. El Art. 362 del mismo cuerpo constitucional establece que la atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y se garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes.

123. En este contexto, el Estado ecuatoriano, promueve el reconocimiento del sistema de salud indígena y de la medicina ancestral, como medida para la conservación y protección de saberes que forman parte de la cultura y de la diversidad nacional.

124. El MAIS contempla la incorporación del enfoque de género en la construcción de las políticas públicas, a fin de tener una mejor comprensión de la realidad y de las vivencias, necesidades, condiciones específicas de las mujeres y las personas con identidad sexo genérica diversa, ubicando como un problema central a la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sus causas y efectos en la vida social.

125. El MSP elaboró el documento “Diagnóstico y Fortalecimiento de Interculturalidad en la Formación del Personal de Salud”, con financiamiento del proyecto BID 2431/OC-EC, que señala los lineamientos para la inclusión del enfoque intercultural en los contenidos de la carrera de Técnicos de Atención Primaria de Salud, Postgrado de Medicina Familiar Comunitaria, y para capacitación y sensibilización del personal de salud y personal administrativo del MSP, así como para las carreras que forman profesionales de la salud, con el fin de mejorar sus capacidades técnicas y humanas en la entrega de servicios con enfoque intercultural<sup>53</sup>.

126. Además, el Estado Ecuatoriano ha promovido el acceso a servicios básicos y a la atención en Centros de Salud -en particular en zonas rurales- respondiendo a las diferencias lingüísticas y culturales de los pueblos indígenas.

127. Como un mecanismo para brindar una atención obstétrica con pertinencia cultural, se publicó la Norma Técnica de Articulación de Prácticas y Saberes de Parteras Ancestrales en el Sistema Nacional de Salud, la cual reconoce la labor realizada por las parteras ancestrales en base a parámetros construidos colectivamente desde las comunidades.

128. En este sentido, la Dirección Nacional de Salud Intercultural del MSP impulsa la atención de partos naturales en libre posición con pertinencia intercultural, como eje fundamental de derechos y calidad en la atención de las usuarias. El parto “culturalmente adecuado” o parto “respetuoso” es una cuestión de derechos, no exclusiva para determinadas nacionalidades y/o pueblos del Ecuador. Mensualmente se registran los estándares e indicadores de parto en libre posición, a saber:

- En todo establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención (Centro de Salud Tipo C) y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico), las salas de partos/UTPR estarán adecuadas para la atención del parto normal de bajo riesgo, en libre posición con pertinencia intercultural.
- Todo establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención (Puesto de Salud, Centro de Salud Tipo A y B) contará con un ambiente adecuado para la atención del parto normal inminente de bajo riesgo, en libre posición con pertinencia intercultural.
- Todo establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) contará con el 100% de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas para la atención de parto normal de bajo riesgo, en libre posición con pertinencia intercultural.
- Todo profesional y personal del establecimiento de Salud involucrado en la atención de partos, estará sensibilizado y capacitado en el proceso de atención de parto normal de bajo riesgo, en libre posición con pertinencia intercultural. En la actualidad, la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información ha

<sup>53</sup> Información de la Dirección Nacional de Políticas y Modelamiento del Sistema Nacional de Salud.

registrado que existen doscientos diez (210) establecimientos de salud que atienden partos en libre posición.

## **Tema 12: Acceso a la Educación Intercultural que responda a la Realidad Étnica - Aplicación del párrafo 22**

129. Complementariamente a lo descrito en el tema 10, la LOEI<sup>54</sup> y su Reglamento General<sup>55</sup>, garantizan el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso en el sistema educativo sin discriminación alguna y determinan su obligatoriedad en los niveles inicial, básico y bachillerato. En ese sentido, Ecuador ha alcanzado la universalización de la educación básica de 5 a 14 años de edad, logrando el 96% de cobertura.

130. En cuanto a la educación superior, el Estado Ecuatoriano, en respuesta a los resultados obtenidos en el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) y consciente de las necesidades de reducir las heterogeneidades en el perfil de ingreso a la universidad -en las áreas de razonamiento verbal, abstracto y numérico- ha visto la necesidad de implementar una metodología didáctica que integre estrategias de trabajo en el territorio, en torno a las tres áreas que explora el examen. En este sentido, el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) ha elaborado el “Programa de Acompañamiento Nacional de Pueblos y Nacionalidades”, orientado a promocionar talleres de trabajo en el territorio, los mismos que son realizados en consideración del listado de poblaciones inscritas.

131. Desde la implementación del SNNA, se ha puesto en marcha la política pública de democratización del acceso a Educación Superior, como una de las bases que fomenta la Revolución Educativa, a fin de alcanzar la sociedad del conocimiento, que persigue la potenciación de capacidades del talento humano con estándares de calidad, mérito, transparencia y en igualdad de oportunidades.

132. Igualmente, se ha implementado un sistema de acción afirmativa a través de la concesión de becas dentro de la política de cuotas, dirigida a las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad frente al resto de aspirantes, para acceder a un cupo dentro de los Institutos de Educación Superior públicos. Este beneficio se otorga una vez que la persona haya rendido el ENES y su puntaje sea de al menos seiscientos uno (601), lo que la faculta a acceder a los cupos ofertados dentro de la política de cuotas en IES -cofinanciadas o autofinanciadas-. Una de las características que se toma en cuenta es la pertenencia a pueblos o nacionalidades, entre otros factores como la discapacidad, ingresos, área de vivienda (rural - urbana) y condición migratoria en el país. Es así que actualmente, 91% de los beneficiarios de esta política pertenece a pueblos y nacionalidades; así mismo, existe un incremento del 50% en el acceso de la población indígena a IES durante el año 2014, en relación con el año 2013.

133. El SNNA ha realizado campañas comunicacionales para dar a conocer, a través de los medios de comunicación, información relevante respecto a los procesos que lleva a cabo. Sin embargo, y puesto que no todos los habitantes tienen acceso a los medios masivos, el SNNA está preparando capacitaciones en sectores rurales y en comunidades, poniendo énfasis en llegar a pueblos y nacionalidades (indígenas, afrodescendientes, montubios, etcétera). Estas capacitaciones se llevan a cabo en el marco del Programa de Acompañamiento Nacional de Pueblos y Nacionalidades, promoviendo talleres motivacionales con el objetivo de despertar el interés de los aspirantes para continuar con su formación académica superior.

---

<sup>54</sup> Registro Oficial N° 417, de 31 de marzo de 2011.

<sup>55</sup> Decreto N° 1241, publicado en el Suplemento Oficial N° 754, de 26 de julio de 2012.

134. Estas estrategias se reflejan en el incremento en el acceso a la educación superior de las personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades: entre los años 2006 y 2014, la tasa de asistencia a instituciones de educación superior aumentó en ocho puntos porcentuales, esto es del 9.3% en 2006 al 17.3% en 2014. De igual manera, la tasa de asistencia a instituciones de educación superior aumentó en cuatro puntos porcentuales, esto es de 14.1% en 2006 a 18.2%, en 2014. De la comparación por regímenes académicos, se determina que desde la implementación del SNNA el acceso a instituciones de educación superior por parte de la población afrodescendiente aumentó; es así en la toma del ENES en régimen costa hay un incremento de 60% de postulantes afrodescendientes, y en el régimen sierra, hay un incremento del 39% en la misma población (esto en los dos últimos periodos de toma del examen).

135. En cuanto a la política de meritocracia, existe un porcentaje exclusivo del Grupo de Alto Rendimiento (GAR)<sup>56</sup> conformado por personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades. La población indígena perteneciente al GAR representó, en el año 2013, el 25% del total de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades dentro del GAR de dicho año, incrementándose en un 26% en el año 2014, en que dicha población representó el 51% del total de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades. En cuanto a la población afroecuatoriana, esta representó el 63% del total de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades del GAR en el 2013, aunque en el año 2014 el porcentaje se redujo a un 33%. Por su parte, la población montubia representó el 13% del total de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades del GAR en el año 2013, decreciendo igualmente en el año 2014, en que representaron al 11% del total de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades del GAR. Periódicamente se realizan campañas informativas sobre el proceso ENES a través de los medios de comunicación masivos, lo que permite generar mayor conocimiento dentro de la población y desmitificar ciertas creencias que se han implantado en el imaginario colectivo. Además, se realizan campañas pre ENES en territorio, como parte del Programa de Acompañamiento Nacional de Pueblos y Nacionalidades, con la finalidad de informar a la población y promover su elección libre y responsable, con base en información válida.

136. El MINEDUC, mediante oficio N° 222-SEIM-2011 de 5 de diciembre de 2011, solicitó al CPCCS designar un representante de cada nacionalidad para la conformación del Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en concordancia con el Art. 85 de la LOEI. El CPCCS designó a catorce (14) representantes de las nacionalidades, para que participen en el proceso de elaboración de la malla curricular del Sistema Nacional de Educación Intercultural Bilingüe.

### **Tema 13: Las Múltiples Formas de Discriminación - Aplicación del párrafo 23**

137. En respuesta al párrafo 23 sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con género, el Estado ecuatoriano, a través de la CRE, consagra derechos de igualdad material y no discriminación.

138. Asimismo, el PNBV, como instrumento de política pública que promueve la igualdad, tiene entre sus objetivos de política más relevantes, la protección y garantía de los derechos de las mujeres y personas GLBTI y la prevención y erradicación de la violencia de género.

<sup>56</sup> El Grupo de Alto Rendimiento (GAR) lo conforman los y las postulantes con los mejores puntajes en el Examen Nacional de Educación Superior (ENES), en función de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).

139. Uno de los logros más significativos radica en la creación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), dentro de los CNI, como órgano responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres y las personas GLBTI, y responsable de garantizar la igualdad de género.

140. A través de la [Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género \(ANMIG\)](#) se configuró la estrategia técnico/política más importante desde el CNIG. La Agenda fue construida con la participación activa de distintas mujeres y personas pertenecientes a grupos GLBTI. El proceso se desarrolló en dos momentos: en un primer momento se realizaron tres (3) consultas previas, siete (7) encuentros de diálogo político con alcance zonal, dos (2) encuentros nacionales -con enfoque intercultural- en la Sierra Centro y en Galápagos. En un segundo momento se ejecutaron tres (3) talleres con grupos específicos de mujeres. Estos procesos incluyeron la información recopilada en los Diálogos para el Buen Vivir, referentes al eje de igualdad de género. Los temas que se debatieron en los diálogos políticos fueron de producción, empleo y trabajo, economía del cuidado, salud, erradicación de la violencia, educación, recreación, saberes y tecnología de la información y comunicación – TIC, participación política y paridad, ambiente y recursos naturales.

141. En cuanto a educación, los Arts. 343 y 347 de la CRE establecen que el fin del Sistema Nacional de Educación radica en el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, instituyendo como una de sus garantías, la erradicación de todas las formas de violencia en el sistema educativo, la preservación de la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes, así como el mantenimiento de un sistema intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural.

142. Dentro de marco jurisdiccional, el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), en su Art. 232, determina que los jueces y juezas de violencia contra la mujer y la familia tienen competencia para conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía, cuando se trate de los casos previstos en la ley contra la violencia a la mujer y la familia. Además, se dispone la inaplicabilidad de mediación, arbitraje o fuero especial para los casos de violencia intrafamiliar y se garantiza la defensa pública especializada para las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

143. Por otra parte, la LOEOP regula la aplicación de la paridad entre hombres y mujeres en las listas para elecciones pluripersonales, y establece como impedimentos para ser candidato el haber ejercido violencia de género, o el haber incumplido con pagos de pensiones alimenticias. Además, como medida de acción afirmativa, la Ley dispone que en la proclamación de dignidades electas, en caso de que exista empate en el último escaño, y entre las personas que hayan empatado haya una mujer, se adjudique el escaño a esta última.

144. La LOFL incorpora de manera transversal el enfoque de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, a través de la creación de la Unidad Técnica Legislativa, cuyo objetivo es acompañar el proceso de creación de la norma y proveer a las Comisiones Especializadas y al Pleno de un informe no vinculante sobre temas trascendentales.

145. La LOCPCS, establece en su Art. 19, la garantía de paridad entre hombres y mujeres de manera alternada y secuencial, de entre los mejores puntuados dentro del concurso de méritos y oposición para su confirmación.

146. De igual manera, el COPFP establece, en su Art. 14, que en el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad.

147. El Art. 48 de la LOSEP contempla, como causal de la destitución de servidores públicos, realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole; y, en el mismo sentido, el Código de la Democracia, determina, en su Art. 21, que para ser miembro del Consejo es indispensable haber cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado por violencia intrafamiliar o de género.

148. En el campo penal, el COIP tipifica la discriminación en razón de sexo, género y orientación sexual. De igual manera, el Código tipifica los actos de odio en razón de sexo, género y/u orientación sexual y sanciona a la persona que cometa actos de este tipo, tal como se manifestó en el párrafo 73.

149. Asimismo, el COIP contempla el delito de feminicidio y sus agravantes, en los Art. 141 y 142<sup>57</sup> respectivamente, y la inclusión de un nuevo tipo penal de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, como delito y contravención, el mismo que será sustanciado a futuro en un procedimiento especial y expedito, que permita a los administradores de justicia actuar en forma célere, oportuna y eficaz.

150. En el COIP se incluye, como agravante de varios delitos, el hecho de que la víctima sea menor de 18 años, mayor de 65, mujer embarazada, una persona con discapacidad, o una persona que padezca de enfermedades que comprometan su vida. Entre otros delitos que contemplan este agravante están el acoso sexual, el abuso sexual, la violación, y otros relacionados con violencia sexual.

151. De igual manera, en el COIP se establece la inadmisibilidad de la caución en aquellos delitos en los que las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad o adultas mayores. Igualmente, la caución será inadmitida en delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar<sup>58</sup>.

152. Entendiendo que el acceso a la justicia es una arista fundamental en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, a través de la Unidad de Atención al Público, de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trabaja conjuntamente con la Unidad de Peritaje Integral, para que en caso de delitos sexuales se reduzca el tiempo de recepción de denuncias y de elaboración de peritajes, debido a que todos estos servicios se concentran en un mismo lugar. Además, en todo el proceso, existe el acompañamiento profesional a la víctima por parte de médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Para la plena vigencia del COIP, se formularon, con la participación de operadores de justicia, organismos de la función judicial, FGE, MSP y Medicina Legal de la Policía Judicial, los siguientes protocolos estandarizados:

<sup>57</sup> Código Orgánico Integral Penal, Art. 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Art. 142.- Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando concurren una o más de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior:

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.
3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima.
4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público.

<sup>58</sup> *Ibidem*, Art. 544.- Inadmisibilidad.- No se admitirá caución:

1. En los delitos en los que las víctimas son niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad o adultas o adultos mayores.
2. En los delitos cuya pena máxima privativa de libertad sea superior a cinco años.
3. Cuando la persona procesada por cualquier motivo ocasione la ejecución de la caución.

- Protocolo para peritajes forenses médico legal de infracciones penales relacionadas con violencia intrafamiliar, delitos sexuales y lesiones, cuando la vida de la víctima no corre riesgo por las lesiones;
- Norma técnica para la prueba de ADN en Ecuador;
- Formulario de consentimiento informado y pericia forense de psicología para niñez y adolescencia, personas adultas e informe de evaluación forense;
- Formulario de consentimiento informado y pericia forense de Trabajo Social;
- Norma de procedimiento de Cámara de Gessel; instructivo y pericia;
- Protocolo entrevista única para víctimas intervención psicológica;
- Protocolo de recepción de testimonio anticipado en Cámara de Gessel; y,
- Protocolo para la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, utilizado por ONU Mujeres para casos de feminicidio.

153. Desde el mes de julio de 2015 se crearon Unidades Especializadas en Violencia de Género (UEVG), con el objetivo de aplicar procedimientos de investigación especializada de delitos como el feminicidio y delitos contra la integridad sexual, receptando testimonios anticipados y realizándose peritajes forenses, médicos legales y psicológicos.

154. En el proceso de transformación del Sistema de Justicia, el Estado ecuatoriano avanza en la implementación de Unidades Judiciales contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia, así como en el diseño de protocolos de atención para evitar que exista una revictimización de las mujeres que acceden al sistema judicial. Las Unidades Judiciales se orientan a dar atención a la violencia que sufren las personas en el ámbito de la familia, y están conformadas por un equipo interdisciplinario que incluye médicos/as, psicólogos/as y trabajadores/as sociales. En el año 2013 se instalaron veintitrés (23) unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en dieciocho (18) provincias. En este sentido, la normativa y reglamento que se aplican es la siguiente:

- Protocolos para la gestión judicial, actuación y valoración pericial en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, (Resolución 154-2014)

155. Reglamento de actuaciones judiciales por hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, (Resolución 172-2014). El principio que sustenta los protocolos se basa en la víctima como sujeto central de derechos, merecedora de una tutela judicial efectiva, específica, multidisciplinaria y de protección integral en todos los pasos del proceso judicial. De igual manera, se establece la transversalidad de los enfoques de derechos humanos, género, intergeneracional, interculturalidad, atención integral, y equidad y no discriminación en la gestión procesal y los modelos de actuación definidos para cada una de las etapas de atención especializada de las unidades judiciales.

156. Desde el año 2007, se cuenta con una política de Estado de erradicación de la violencia, que nace con el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres (PNEVG), y que refuerza el rol del Estado y garantiza una vida libre de violencia a mujeres en los distintos ciclos de su vida. El PNEVG ha promovido un trabajo de coordinación interinstitucional para avanzar hacia la prevención, sanción y eliminación de la violencia de género. Entre sus ejes estratégicos están la transformación de patrones socioculturales, la implementación de un sistema de protección integral y el acceso a la justicia.

157. El Sistema de Protección Integral ha priorizado la creación e implementación de casas de acogida y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, de manera coordinada con organizaciones de la sociedad civil y bajo la tutela del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

158. Asimismo, se crearon Centros de Protección de Derechos para receptor denuncias, conocer y brindar asistencia legal, social y psicológica en casos de vulneración de derechos a mujeres, NNA.

159. Por otra parte, en el marco del programa de atención integral a la violencia basada en el género, se han creado salas de primera acogida para víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar en hospitales públicos, a fin de dar atención integral y especializada de carácter médico, psicológico, social, e incluso y jurídico, con calidad y calidez, a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar.

160. Se crearon quince (15) salas de primera acogida, ubicadas en las salas de emergencia de los hospitales, y cuentan con un profesional médico/a, un/a psicólogo/a, y un/a trabajador/a social. En el año 2013 se atendió a nivel nacional a un total de catorce mil (14.000) personas víctimas de violencia de género, y, en el año 2014, se reporta la atención a veinte y cuatro mil trescientos dos (24.302) personas.

161. En lo referente a la actualización de la Norma Técnica de Atención Integral en Violencia de Género, se cuenta con un protocolo de atención de pericias en casos de delitos sexuales (coordinado con la FGE), que se aplica igualmente en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

162. Al igual que lo expuesto en el tema de Acceso Masivo a la Salud Pública, el MAIS, como estrategia de servicios, tiene como fin promover el trato igualitario y no discriminatorio y garantizar la atención integral a víctimas de violencia de género. Para la correcta aplicación de la Estrategia se están implementando las siguientes unidades y centros especializados:

- La unidad de emergencia del centro que cuente con el equipamiento mínimo para atender casos de violencia sexual y/o violencia de género;
- La unidad de emergencia del centro que cuente con un espacio reservado para brindar atención médica a posibles víctimas de violencia de género y violencia sexual;
- El centro de salud que cuente con la Norma Técnica de Atención Integral de Violencia de Género; y,
- El centro de salud que cuente con atención psicológica para la atención, contención y seguimiento a las víctimas de violencia de género y/o violencia sexual.

163. La Subdirección de Género del Consejo de la Judicatura tiene entre sus atribuciones las de impulsar procesos de asesoría y proponer insumos de capacitación para la transversalización del enfoque de género en los órganos jurisdiccionales, auxiliares y autónomos. En este marco, durante el proceso de difusión de los protocolos para la gestión judicial, actuación y valoración pericial en casos de violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar, se pone especial atención a los principios de atención a la víctima, siendo uno de ellos el de interculturalidad.

164. En cuanto a participación y fomento del empoderamiento de las mujeres indígenas, y con el fin de consolidar los esfuerzos enfocados para la capacitación de lideresas rurales, candidatas y autoridades electas en procesos democráticos, el CNE firmó un convenio con la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, a ser administrado por el Instituto de la Democracia. Dicho convenio contempla la elaboración de programas específicos con el objetivo de promover el fortalecimiento de las capacidades de las candidatas y mujeres autoridades rurales, de tal forma que se visibilice su presencia a nivel local y nacional. Para tal efecto, se trabaja sobre cuatro ejes: 1) Ruralidad, 2) Género en el ámbito rural, 3) Planes de trabajo y programas de gobierno, y 4) Participación política de la mujer rural.

165. De igual forma, el CNE firmó un convenio con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, para fortalecer el ejercicio de los derechos de participación política, gestión de los procesos electorales y actividades vinculadas al ejercicio protagónico y democrático de las autoridades, organizaciones sociales y ciudadanas afincadas en las parroquias rurales del territorio nacional, cuya administración está a cargo del Instituto de la Democracia y contempla como objetivos: 1) Dinamizar las relaciones institucionales, 2) Fortalecer las capacidades de los candidatos y líderes políticos, e 3) Investigar la democracia comunitaria y sus mecanismos.

166. Con el interés de promover el desarrollo de proyectos y actividades conjuntas de capacitación, el trabajo en el marco de dicho convenio prioriza los siguientes temas:

- Democracia comunitaria;
- Liderazgo político y gestión pública;
- Formación de posibles candidatos a dignidades de elección popular; y,
- Capacitación en derechos de participación política.

#### **Tema 14: Los Pueblos en Situación de Aislamiento - Aplicación del párrafo 24**

167. El Ecuador se ha convertido en un referente regional respecto a la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV), pues a fin de precautelar su vida, integridad, y demás derechos garantizados en la CRE e instrumentos internacionales, ha adoptado de forma progresiva diferentes medidas, a saber:

- Con fecha 29 de enero de 1999, mediante Decreto Ejecutivo N° 552<sup>59</sup>, se declaró Zona Intangible de Conservación, vedado a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, al territorio en el que los PIAV han construido su espacio de habitación y desarrollo.
- Con fecha 3 de enero de 2007, mediante Decreto Ejecutivo N° 2187<sup>60</sup>, se delimitó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), con una superficie de setecientos ochenta y cinco mil cincuenta y un (785.051) hectáreas. Como salvaguardia jurídica y técnica adicional, se instituyó una zona de amortiguamiento, con una extensión de diez (10) kilómetros alrededor de la ZITT, donde está prohibida la realización de actividades extractivas, de productos forestales con propósitos comerciales, otorgamiento de concesiones mineras, así como también obras de infraestructura tales como carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras, entre otras obras incompatibles con el objeto de la ZITT.
- Con fecha 18 de abril de 2007, se publicó el Plan de Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario, en el que se fijaron principios y líneas estratégicas de acción para la protección de los PIAV.
- Con fecha 25 de febrero de 2008, se suscribió un Acuerdo Interministerial entre el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, y el Ministerio de Defensa Nacional estableciéndose una estación de monitoreo de la ZITT, *Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri - Taromenane* (EMZITT).
- Con fecha 06 de marzo de 2008, a través del Acuerdo Interministerial N° 120, se aprobó el Código de Conducta que observarán las empresas públicas y privadas, con

---

<sup>59</sup> Decreto Ejecutivo N° 552, publicado en el Suplemento Oficial N° 121, de 2 de febrero de 1999.

<sup>60</sup> Decreto Ejecutivo N° 2187, publicado en el Suplemento Oficial N° 1, de 16 de enero de 2007.

el fin de asegurar que las actividades y procedimientos de las empresas hidrocarburíferas colindantes a la ZITT se desarrollen bajo los estándares de respeto a las formas y expresiones socioculturales de los PIAV.

168. En relación con lo antedicho, se han realizado constantes monitoreos y georeferenciaciones de señales de presencia de PIAV y se realizan capacitaciones constantes sobre derechos de los PIAV, dirigidas al personal de las Fuerzas de Seguridad, servidores públicos y personas de las poblaciones aledañas. Además, se han realizado brigadas médicas en diferentes comunidades indígenas próximas a la ZITT.

169. En el mismo sentido se ha emitido el Protocolo para Situaciones de Encuentro con Pueblos Indígenas en Aislamiento, que constituye una guía de procedimiento para los eventuales escenarios de encuentro con PIAV, y prevé protocolos de actuación en situaciones como las siguientes:

- Señales de posible presencia de indígenas en aislamiento en el área;
- Visita de indígenas en aislamiento a una comunidad o campamento;
- Observación de indígenas en aislamiento en el bosque o lugares alejados;
- Los indígenas en aislamiento permanecen más tiempo en la comunidad o campamento;
- Ataque violento por parte de los indígenas en aislamiento;
- Encuentro con indígenas que presenten problemas de enfermedades;
- Hallazgo de cuerpos indígenas sin vida; y,
- Lugares arqueológicos y/o restos fúnebres.

170. Adicionalmente, en el marco de esta política nacional de protección a los PIAV, mediante Acuerdo Ministerial N° 0869, de 03 de marzo de 2015, el MJDHC creó la Dirección de Protección a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos de dicha Cartera de Estado, y le otorgó las siguientes atribuciones<sup>61</sup>:

- Formular, coordinar y evaluar la ejecución de protocolos, procedimientos, planes de contingencia, criterios técnicos, códigos de conducta e instructivos para la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario;
- Fortalecer las capacidades para el monitoreo y la interpretación de culturas de selva;
- Implementar y garantizar la debida aplicación de la política integral de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario;
- Realizar el seguimiento y control de la implementación de las medidas cautelares, los principios de la política nacional y de los protocolos sectoriales para la protección de los pueblos en aislamiento en el territorio;
- Sistematizar, priorizar y procesar las demandas de los pueblos indígenas involucrados en las perspectivas de pacificar las zonas de conflicto;
- Desarrollo de los consejos consultivos tendientes a garantizar la debida implementación de las medidas cautelares generales y especialmente para la protección de los pueblos en aislamiento. Seguimiento a instancias de participación;

<sup>61</sup> Acuerdo Ministerial N° 0869, publicado en el Suplemento Oficial N° 573, de 26 de agosto de 2015, Art. 2.

- Coordinar la definición de planes y programas para el desarrollo de actividades económicamente y ecológicamente sustentables en la zona intangible y las áreas colindantes;
- Coordinar con instituciones pertinentes la elaboración, ejecución de planes, programas y proyectos que contribuyan a la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en temas de salud, educación, actividades turísticas, ambiente, seguridad de la ZIIT; y,
- Evaluar la ejecución de planes, programas y proyectos para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

### **Tema 15: Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban - Aplicación al párrafo 25**

171. Ecuador es signatario de la Declaración y Programa de Acción de Durban del 2001, por lo que sus postulados han sido considerados por este Estado en la normativa interna. Se tiene en cuenta que las discriminaciones pueden ser dobles o múltiples, y por esta razón se ha expedido normativa interna que transversaliza el enfoque de género y el enfoque de movilidad humana simultáneamente. Siguiendo este compromiso internacional, las leyes, normas, planes y programas referidos en el presente informe dan cuenta de las medidas adoptadas por el Ecuador para la ejecución de los preceptos internacionales con los que se ha comprometido.

172. El Estado Ecuatoriano, sobre la base de la resolución 68/237, aprobada por la Asamblea General con fecha 23 de diciembre de 2013, mediante la cual se proclama el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, Con fecha 6 de agosto de 2015, relanzó la mesa Decenio de los Afrodescendientes – capítulo Ecuador, y se instaló la mesa en la provincia del Guayas, en los cantones de Durán y Guayaquil, llevándose a cabo un conversatorio y una noche de integración con líderes, lideresas y organizaciones del pueblo afroecuatoriano.

173. Además, evidenciando el compromiso que el Gobierno Nacional mantiene para la implementación del Decenio, el 16 febrero del 2016, se firmó el Decreto Ejecutivo N° 915, por medio del cual se declara como política nacional el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo 2015-2024, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de noviembre del 2014, mediante Resolución N° 69/16.

174. Actualmente, se mantienen reuniones periódicas sobre los ejes del Decenio, a través de diálogos abiertos entre entidades del Estado, promoviendo el desarrollo social (justicia, educación, equidad, salud, vivienda, inclusión al área laboral, recuperación de sitios ancestrales, entre otros) lideradas por organizaciones sociales, a fin de conocer sus demandas de manera directa y materializarlas en políticas y acciones públicas concretas y eficientes, que garanticen la mejora de sus condiciones de vida.

## Tema 16: Difusión de los Informes - Aplicación del párrafo 26

175. El Estado ecuatoriano, en respuesta al párrafo 26, resolvió crear el Comité de Transparencia para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 7<sup>62</sup> de la LOTAIP. En este sentido, el Estado vela por el cumplimiento de la difusión de información correspondiente a la LOTAIP, mediante la identificación de Unidades Poseedoras de Información que reportan los informes a través de formularios de difusión, publicados mensualmente en el sitio web del CORDICOM, en el menú de “Transparencia”<sup>63</sup>, poniendo a disposición del público en general, informes de las actividades institucionales llevadas a cabo.

176. En lo que respecta a la atención a la ciudadanía a través del correo electrónico [atención.ciudadana@cordicom.gob.ec](mailto:atención.ciudadana@cordicom.gob.ec), el CORDICOM reporta un total de mil ciento cuatro (1.104) respuestas entre los meses de enero y julio de 2015. Este servicio responde a demandas de información en los ámbitos de la gestión institucional.

177. El MJDHC, en ejercicio de sus competencias, elaboró la Plataforma Web SIDERECHOS, como un recurso institucional y ciudadano de acceso a información sobre Derechos Humanos y rendición de cuentas sobre los avances en el ámbito. SIDERECHOS es una plataforma virtual que cuenta con un sistema de información relacionado a los derechos de las personas que viven en el Ecuador, basándose en lo estipulado por la CRE y los tratados Internacionales de derechos humanos. Consiste en una sólida herramienta, con base en el principio de consolidación de un Estado democrático, y con miras a la construcción del poder popular, que nace del conocimiento y la garantía de los derechos de todas y todos, en un marco de justicia en la diversidad. Es un Sistema dirigido específicamente a servidores públicos, periodistas, estudiantes, profesores y abogados en libre ejercicio. El contenido de la página SIDERECHOS<sup>64</sup> contempla buscadores de estándares constitucionales e internacionales, biblioteca de informes, informes de derechos humanos en construcción y seguimiento a recomendaciones internacionales.

178. Como medida para garantizar el acceso a la información, el Estado ecuatoriano gestionará la traducción a lenguas originarias para conocimiento de los pueblos y nacionalidades.

### III. Conclusiones

179. El presente documento da cuenta de la importancia que el Estado ecuatoriano otorga a la lucha contra la discriminación, de manera integral, incluyendo la interseccional y particularmente racial, a través de la administración gubernamental, como piedra angular de la gestión pública, lo que ha llevado a la generación de instrumentos normativos, institucionales y administrativos que han logrado operativizar en forma inmediata y permanente la acción del Estado en esta materia.

180. Con el objetivo de consolidar en la práctica el disfrute de estos derechos, se ha trabajado desde las instituciones públicas competentes, a través del desarrollo de políticas y programas multisectoriales e integrales. De esa manera, el Ecuador ha trabajado por diseñar

<sup>62</sup> Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 7.- Clasificación y Conservación de la Información.- Con la finalidad de garantizar la difusión y acceso a la información histórica que haya sido publicada en el portal institucional, el link de Transparencia deberá conservar la información publicada cada mes de cada uno de los literales que comprende el Art. 7 de la Ley, clasificada en un link por cada año de ejercicio fiscal.

<sup>63</sup> Sitio Web del CORDICOM: [www.cordicom.gob.ec](http://www.cordicom.gob.ec).

<sup>64</sup> Disponible en: [www.siderechos.gob.ec](http://www.siderechos.gob.ec).

un sistema de promoción integral de los derechos humanos, en cumplimiento con las obligaciones contraídas a través de instrumentos internacionales de derechos humanos.

181. En este sentido, se evidencia las consideraciones que al respecto ha hecho de manera específica la CRE y también el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) desde los diferentes instrumentos que lo norman. De igual manera, la acción del Estado se vuelve operativa e intersectorial, al incorporar dos metas nacionales específicas en el Plan Nacional de Desarrollo, para combatir la discriminación a pueblos y nacionalidades en el territorio nacional. La incorporación de un enfoque de derechos, basado en principios de igualdad, plurinacionalidad e interculturalidad en la planificación nacional, desde los objetivos, políticas y metas, significa además orientar toda la gestión pública hacia esa dirección, obligando así a que todos los demás instrumentos de planificación sectorial se articulen con dichos principios, y comprometiendo simultáneamente a los diferentes órganos rectores de la política pública. Además, es preciso señalar la importancia de la tipificación del delito de discriminación y odio en el COIP, como recurso que establece la sanción oportuna para quienes recaen en estos delitos y para prevenir su cometimiento a futuro.

182. Adicionalmente, las políticas públicas impulsadas por el Estado Ecuatoriano han sido creadas e implementadas bajo un ejercicio participativo sin precedentes, en el que se reconoció la diversidad de la población a través de convocatorias dirigidas a múltiples sectores con características étnicas y socioculturales diversas. Este ejercicio nutrió y enriqueció desde la ciudadanía la elaboración del PNBV, como máximo instrumento de planificación nacional.

183. Estas acciones, más los principios orientadores de la Constitución de la República y del Plan Nacional para el Buen Vivir, confirman y afianzan tanto el compromiso como la consonancia del Estado Ecuatoriano con la lucha global contra la discriminación racial desde una gestión pública con visión de largo plazo.

184. Finalmente, el Estado Ecuatoriano está consciente de que la discriminación racial aún se encuentra presente en sus diversas formas, especialmente con respecto a participación, acceso al trabajo, educación y salud; y por lo tanto, se compromete a seguir impulsando políticas públicas que impliquen la participación directa de sus beneficiarios para la erradicación de la discriminación racial en beneficio de los ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros que habiten en el país.

---